


320.5  
MAR  
Ido

IDOS Y RECIÉN LLEGADOS  
LA IZQUIERDA URUGUAYA EN EL EXILIO Y LAS REDES  
TRANSNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS,  
1967-1984

Vania Markarian

320.5 MAR Ido  
Idos y recién llegados :  
  
\*FUCE/163521\*



Traducción: Irene Delgado Rey

CORREO DEL MAESTRO • EDICIONES LA VASJA  
CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS URUGUAYO (CEIU)  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

163521

Don. ENC. NEL. EST. HIST. URUG. Set. 06

16482

*Es posible sentir nostalgia, sí. Pero no sólo de la tierra, sino fundamentalmente de la gente. De la gente con quien hablar, de un hijo que –de todos modos– no está allí. De la casa que le cuidaste un domingo y viste, desconfiaste espiarle por tiras. Hoy esa casa está deshecha, el arroyo que pasaba muy cerca de sus puertas entubado y oculto, con sus ratones de la orilla engullidos o ahogados. Tenía un nombre poético ese arroyo, Arroyo del Molino. Y la gente que vivía en esas piezas ha desaparecido o está dispersa por el mundo, injuntable, tal vez, de hoy para siempre. Preferimos a veces referirlo, por comodidad, al nombre de un lugar (sobre todo si la calle lleva el nombre de un Rey de Troya), a la memoria de unos árboles, al recorte de un trozo de sombra o a una humedad de pie descalzo en el césped. Pero todo esto, si lo meditamos mejor, se revela anecdótico, inconsistente y falso.  
¿Dónde estará hoy tu casa, dónde tu patria?*

Carlos Martínez Moreno  
*El color que el infierno me escondiera*  
1981

Esta edición en lengua española fue realizada a partir del original de Taylor & Francis Group, LLC por

Uribe y Ferrari Editores, S.A. de C.V.  
Av. Reforma No. 7-403 Ciudad Brisa, Naucalpan,  
Estado de México, C.P. 53280, México  
Tels. 53 64 56 70 • 53 64 56 95  
correo@correodelmaestro.com • www.correodelmaestro.com

ISBN: 970 756 143 2 *Idos y recién llegados. La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos, 1967-1984*

© 2006 Uribe y Ferrari Editores, S.A. de C.V.

Traducción al español: Irene Delgado Rey  
Cuidado de la edición: Correo del Maestro y Ediciones La Vasija  
Diseño de portada: Monocromo

© 2005 Taylor & Francis Group, LLC  
Título original: *Left in transformation. Uruguayan exiles and the Latin American human rights networks, 1967-1984*

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida total ni parcialmente, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, electrónico, de fotocopiado o cualquier otro, sin autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

# Contenido

Abreviaturas	xv
Introducción	1
<i>Capítulo Uno</i>	
La izquierda uruguaya, 1967-73	11
1. Años de decisiones trascendentales	12
2. Una respuesta política al autoritarismo de Pacheco	16
3. El Frente Amplio en acción	21
4. Reacciones frente a la participación de los militares en política	30
5. Vivir y morir por la revolución	40
<i>Capítulo Dos</i>	
Los exiliados uruguayos y las primeras experiencias de activismo transnacional, 1973-76	53
1. Los uruguayos en Buenos Aires	54
2. La campaña de Michelini	64
3. La campaña de Amnistía Internacional contra la tortura en Uruguay	73
4. El Congreso de Estados Unidos y las violaciones de los derechos humanos en Uruguay	83
5. Compromisos humanitarios	93

<i>Capítulo Tres</i>	
Activismo transnacional y política nacional, 1976-80	103
1. Intentos de unir la oposición política	104
2. Participación en redes de derechos humanos	120
3. Debates de derechos humanos	135
<i>Capítulo Cuatro</i>	
Los derechos humanos en la transición, 1981-84	151
1. Una apertura política inesperada	152
2. Derechos humanos y transición	165
3. El nuevo heroísmo	182
Conclusiones	195
Notas	205
Bibliografía	275
Índice	293

## Abreviaturas

26M	26 de Marzo
ABA	American Bar Association (Colegio de Abogados)
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AFUDE	Agrupación de Familiares de Desaparecidos Uruguayos
AI	Amnistía Internacional
AIUSA	Amnistía Internacional USA
ASCEEP	Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública
CALC	Clergy and Laity Concerned
CDPPU	Comités para la Defensa de los Presos Políticos Uruguayos
CDU	Convergencia Democrática en Uruguay
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIJ	Comisión Internacional de Juristas
CMI	Consejo Mundial de Iglesias
CNR	Comisión Nacional del Reencuentro
CNT	Convención Nacional de Trabajadores
ERP	Ejército Revolucionario del Pueblo
FA	Frente Amplio
FAE	Frente Amplio en el Exterior
FIDEL	Frente Izquierda de Liberación Nacional

los viejos objetivos revolucionarios de revertir la estructura de clases y tomar el centro del poder. Las demandas "humanitarias" fueron un aspecto clave de sus esfuerzos por hacerse un lugar en la arena internacional en una época en que AI y varios congresistas demócratas, por mencionar a los actores más importantes en el caso uruguayo, utilizaban un lenguaje similar para avanzar sus propios intereses. Aunque no todos los exiliados adhirieron enseguida, el activismo de derechos humanos empezó a ofrecer un espacio de militancia común frente la persecución y en las condiciones de dispersión del exilio. En los años que siguieron a la muerte de Michelini, la izquierda uruguaya incrementó su participación en las redes transnacionales y trató de conciliar esta nueva militancia con sus definiciones ideológicas y políticas más generales. El próximo capítulo analiza sus éxitos y fracasos en ese intento.

### Capítulo Tres

## Activismo transnacional y política nacional, 1976-80

A partir de 1976, miles de uruguayos intentaron escapar de la creciente ola represiva en Argentina. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y varias embajadas extranjeras fueron inundados por uruguayos que trataban de huir de Buenos Aires. Muchos países trabajaron para recibir a estos y otros refugiados que venían directamente desde Uruguay. En sus nuevos destinos, los exiliados pronto comenzaron a participar en comités locales y grupos de solidaridad, así como a reorganizar los partidos y facciones de la izquierda uruguaya. A pesar de su vitalidad, esta actividad no fue suficiente para unir a la oposición política en un frente único. Aunque éste era un objetivo muchas veces repetido por los dirigentes de izquierda, las evaluaciones de su pasado reciente, las caracterizaciones del régimen y las ideas acerca de lo que pasaría luego de su caída impidieron la formación de una alianza política permanente. Los militantes de izquierda generalmente trabajaban juntos a nivel local, pero los grupos a los que pertenecían no pudieron encontrar una base permanente para la acción común ni salvar las discrepancias con otros grupos de oposición dentro y fuera de Uruguay. Como resultado, la militancia del exilio en este período fue más claramente reactiva a las iniciativas del régimen que creativa a la hora de proponer salidas.

Al mismo tiempo, la mayoría de los exiliados participó en las redes transnacionales de derechos humanos que estaban creciendo y prosperando en esos años, favorecidas por cambios en la política

exterior estadounidense y el creciente interés de la comunidad internacional. Los exiliados no sólo colaboraron con los grupos de derechos humanos para plantear sus reclamos ante organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, sino que también se organizaron por su cuenta para denunciar la prisión política y otras violaciones que se cometían en su país. Si bien su compromiso en este frente mostró la hábil adopción del lenguaje y los procedimientos del activismo transnacional, resultó demasiado débil para unir a todos los grupos y partidos que se oponían al régimen autoritario. Los uruguayos no establecieron una organización centrada exclusivamente en reclamos de derechos humanos; las estrategias políticas partidarias siempre fueron el marco de sus actividades. El objetivo principal de este capítulo es comprender por qué el activismo de derechos humanos no logró trascender las diferencias del exilio para sustentar una acción política común.

#### INTENTOS DE UNIR LA OPOSICIÓN POLÍTICA

Entre 1976 y 1980, los intentos para unificar a la oposición fuera del país siguieron dos rutas diferentes, aunque muchas veces superpuestas: por un lado, se buscó la alianza entre los partidos y grupos de izquierda; por otro, se plantearon acuerdos más amplios entre la izquierda y ciertos sectores de los partidos tradicionales, especialmente con el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. El primer acto de masas luego de la etapa argentina del exilio tuvo lugar en Caracas en diciembre de 1976 y pareció auspicioso en ambos sentidos ya que contó con la presencia del líder blanco y de Óscar Maggiolo, exrector de la Universidad de la República, en nombre del Frente Amplio. La elección de Caracas no fue accidental. El gobierno venezolano, muy receptivo con los exiliados latinoamericanos y muy crítico de los regímenes autoritarios del Cono Sur, había roto relaciones diplomáticas con Uruguay a causa de Elena Quinteros, secuestrada por fuerzas militares uruguayas en el jardín de la embajada de Venezuela en Montevideo cuando intentaba pedir asilo. Tanto Ferreira Aldunate como Maggiolo,

que vivía en Venezuela, agradecieron al país anfitrión y llamaron a sus compatriotas a unir esfuerzos en favor del “restablecimiento de la democracia en Uruguay”. Pero sus diferencias se hicieron evidentes en extensas entrevistas aparecidas en un boletín publicado por exiliados uruguayos en Venezuela. Mientras Maggiolo destacó que el FA tenía como objetivo “estructurar un plan político que abarque a todas las fuerzas opositoras”, Ferreira Aldunate declaró que “nunca he sido partidario, ni seré, de [...] ese tipo de grandes entendimientos nacionales, provistos de programas y definiciones demasiado nítidas.”<sup>1</sup>

Estas posiciones reflejaban las diferentes situaciones de sus fuerzas políticas dentro y fuera de Uruguay. Maggiolo hablaba en nombre de una coalición que todavía mantenía cierta actividad clandestina en Uruguay y contaba con el favor de la mayoría de los exiliados. Aunque debilitado por la represión y bajo el ataque de algunos de sus integrantes, el FA mantenía el sólido apoyo del PCU y el PS, dos partidos fuertes. Por el contrario, sólo Ferreira Aldunate y unos pocos dirigentes de menor categoría representaban al Partido Nacional fuera del país. Por otra parte, Ferreira Aldunate era el candidato que había obtenido más votos en las elecciones de 1971 y podía por tanto dar a la eventual alianza de la oposición un manto de legitimidad popular mayor al que tenían los grupos y partidos de izquierda. En este sentido, la izquierda sólo podía llamar a un acuerdo formal y esperar la respuesta del líder blanco. Pero hasta ese momento Ferreira Aldunate se limitaba a repetir “Debemos golpear juntos y mantener la individualidad” y no iba más allá de reuniones con algunos líderes de izquierda y discursos en algunas concentraciones comunes.<sup>2</sup> Su participación en el acto de Caracas no tuvo mayores consecuencias inmediatas.

Pocos meses después, México fue escenario de un importante esfuerzo por unir a las fuerzas de la izquierda. En junio de 1977, cuarto aniversario del golpe de Estado, un grupo de figuras independientes convocó a un encuentro de líderes uruguayos exiliados que iban a participar en la tercera reunión conjunta de los parlamentos de Latinoamérica y Europa a fines de julio.<sup>3</sup> Estas personalidades no invocaban una representación partidaria, sino que actuaban en su

condición de conocidas figuras de izquierda: el ex decano de la Facultad de Agronomía Santos Arbiza Aguirre, el sociólogo Gerónimo de Sierra, el editor Federico Fasano Mertens y el ex decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Mario Otero. Citaron como antecedentes de su convocatoria algunas declaraciones recientes de líderes exiliados que condenaban al régimen autoritario y sugerían unir esfuerzos en su contra. También las iniciativas de organizaciones internacionales, grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros se mencionaban para subrayar que era el momento oportuno para acelerar el fin de un "régimen aislado". El 28 de julio, el Comité de Solidaridad con Uruguay organizó una concentración con la participación de los dirigentes de izquierda invitados a la reunión: Enrique Erro (Patria Grande), Enrique Rodríguez (PCU), José Díaz (PS) y Hugo Cores (PVP). Cientos de exiliados acompañaron la concentración. Su presencia en México era, al igual que en Venezuela, resultado de una política oficial de recibir exiliados latinoamericanos, a lo que se sumaba el esfuerzo personal del embajador en Montevideo para salvar las vidas de cientos de refugiados.<sup>4</sup> Dos días después de la concentración, los cuatro dirigentes de izquierda firmaron un acuerdo que convocaba a la "acción común" contra la prisión política, la tortura, el secuestro y cualquier otra práctica que restringiera "las libertades democráticas y sindicales". Este "acuerdo de México" también propuso la creación de un "frente antidictatorial".<sup>5</sup>

En un registro diferente, los esfuerzos por reorganizar el Frente Amplio en el exilio ya estaban en marcha en Europa. En marzo de 1977, el dirigente comunista Rodney Arismendi, que estaba en Moscú, y el líder socialista exiliado en España José Díaz se habían reunido en Berlín con Hugo Villar, ex candidato a la vicepresidencia del FA, que también vivía en España, y los militantes de izquierda Maggiolo y Jorge Orstein, ambos residentes en Venezuela. Siete meses después se fundó en España el comité coordinador del Frente Amplio en el Exterior (FAE) con la participación del dirigente socialista José Pedro Cardoso que viajó desde Uruguay para representar a las autoridades de la coalición que se encontraban dentro del país. Este comité estableció su sede en Madrid, designó a Villar como

Secretario General y lanzó un llamado a la unidad de la oposición "sobre la base de un programa de acción común". Dicho programa debía promover "los derechos humanos, las libertades democráticas esenciales, la liberación de los presos políticos, la consulta a la voluntad del pueblo y urgentes medidas económicas que pongan un dique al dramático deterioro del nivel de vida de la población."<sup>6</sup>

Aunque no había contradicciones evidentes entre ambos manifiestos, el FAE y el "acuerdo de México" despertaron acaloradas discusiones entre los exiliados uruguayos y terminaron representando diferentes modelos de unidad política contra el gobierno. Una vez más, hubo una temprana separación entre el Partido Comunista y sus aliados en el FAE, por un lado, y los grupos conocidos como "corriente/tendencia", por otro, aunque frecuentes realineamientos pronto opacaron esta división básica. Los intentos de reorganizar el movimiento obrero en el exilio reflejaron estas discrepancias y agregaron nuevos temas de debate.<sup>7</sup> Es difícil precisar qué asuntos estaban en juego en estas discusiones ya que todos los participantes se atacaban mutuamente en nombre de sus principios e ideologías. En lo que con frecuencia parecía una batalla de sutiles interpretaciones y rumores sin fundamento, se solía utilizar la condición del exilio para descalificar a los contendientes ya que muchos afirmaban que no se podía tomar ninguna decisión importante afuera del país. Los grupos y partidos con actividad clandestina en Uruguay utilizaron esta fórmula para legitimar sus puntos de vista, pero no está claro hasta dónde reflejaba su funcionamiento real en este período. En condiciones de dura represión y difíciles comunicaciones, las referencias a "dentro del país" eran con frecuencia sólo un mecanismo para rechazar algunas posiciones y apoyar otras. El sectarismo y la desconfianza tuvieron una influencia importante, pero también hay que tener en cuenta que estas disputas tuvieron lugar a lo largo y ancho del mundo en una época en que los periódicos, folletos y cartas cambiaban de manos lentamente para llegar a sus destinos. Junto con consideraciones ideológicas y políticas, estas dificultades logísticas obstaculizaron la unidad de la izquierda en el exilio.

Los diferentes partidos y grupos dedicaron tiempo y esfuerzos a debatir cuál era la mejor base para poner en marcha un frente de oposición. Los primeros y más importantes promotores del FAE eran el PS y el PCU. Tal como habían hecho en Buenos Aires, Erro y sus partidarios de Patria Grande siguieron atacando duramente a la coalición, mientras insistían en el "acuerdo de México" como única base genuina para la unidad. La eficacia del Frente Amplio como herramienta política contra el régimen estuvo en el centro de esta discusión. Desde París, Erro insistió en que el FA había dejado de ser una opción válida al apoyar los comunicados de las Fuerzas Armadas de febrero de 1973 y abrir la puerta a la participación de los militares en política. Argumentaba que había perdido lo que le quedaba de relevancia política luego del golpe, cuando algunos de sus integrantes habían abandonado la coalición. Por lo tanto, veía en el "acuerdo de México" una oportunidad para comenzar de nuevo y reunir a quienes ya no creían en el FA, como él, quienes aún estaban alineados, como el PCU y el PS, y los que nunca lo habían integrado, como el recientemente fundado PVP. Según Erro, este nuevo acuerdo atraería, a su vez, a Ferreira Aldunate. También daba a entender que el FA debía dejar de existir para que sus integrantes participaran en la nueva formación.<sup>8</sup>

El documento de lanzamiento del FAE en España a fines de 1977 respondía a estos ataques. Reconocía que el FA existía en Uruguay más como una "inspiración política para el pueblo" y una "obligación moral con su líder preso Liber Seregni" que como una fuerza política tangible. Pero también sostenía que el papel de las Fuerzas Armadas en el gobierno daba legitimidad a la coalición porque éstas representaban a los mismos sectores contra los que se había fundado el FA en 1971, los "mismos intereses antinacionales" de la oligarquía y el imperialismo.<sup>9</sup> Enrique Rodríguez, ex senador comunista exiliado en Berlín que actuaba en nombre del PCU en las negociaciones de la izquierda, agregó que el FA era mucho más representativo que los cuatro participantes del "acuerdo de México" y tenía un programa social y político más profundo. Su opinión tenía particular importancia ya que había firmado ese acuerdo en representación de su

partido. Según él, el acuerdo había sido el resultado de una reunión sin demasiada importancia entre algunos dirigentes que aprovecharon la oportunidad para expresar su oposición a la dictadura, pero no obligaba a los firmantes a ninguna coordinación formal. No podía ser de otra manera, decía, dado que su principal recuerdo de la reunión era la insistencia de Erro en vetar al FA, una blasfemia absoluta tanto para su partido como para los socialistas. Además, Rodríguez objetaba fuertemente la sustitución de la coalición por un acuerdo político creado fuera del país.<sup>10</sup>

Una importante novedad en esta discusión sobre la eficacia del FA para derrotar al régimen y promover el cambio social en Uruguay fue que la tensión entre actividad política legal y lucha armada ya no parecía un tema central. Ya fuera por motivos ideológicos o políticos, los grupos de izquierda que habían apoyado o empleado métodos violentos abandonaron esta estrategia en la segunda mitad de los setenta. La razón aparente para este cambio fue la derrota de los movimientos guerrilleros y de acción directa, aunque experiencias similares en otros países latinoamericanos no tuvieron el mismo efecto: izquierdistas chilenos y argentinos se aferraron a la lucha armada mucho después de sus fracasos iniciales e incluso surgieron nuevos grupos bajo condiciones de extrema represión.<sup>11</sup>

Por el contrario, luego de algunos intentos fallidos por parte de grupos escindidos en 1975, los tupamaros no realizaron más acciones armadas. En años anteriores, los tupamaros exiliados en Buenos Aires habían sostenido acalorados debates sobre temas ideológicos y tácticos, en los que muchos habían criticado las orientaciones "foquistas" y apoyado el marxismo-leninismo. Los tupamaros que vivían y entrenaban en Cuba se dividieron siguiendo líneas similares. En 1976, la dirigencia cubana los alentó a abandonar la isla, en un movimiento para desatar lazos con los guerrilleros latinoamericanos y acercarse a los partidos comunistas, a tono con el reciente giro prosoviético de la isla. Algunos tupamaros se involucraron en acciones guerrilleras en Colombia, El Salvador y Nicaragua. Otros fueron a Europa, donde intentaron redefinir su actividad política. Un pequeño grupo relacionado con Nuevo Tiempo rechazó viejos



compromisos revolucionarios y se acercó a Ferreira Aldunate, pero una cantidad mucho mayor se integró de forma independiente a comités locales y grupos de solidaridad en el exterior. Con frecuencia discutieron su participación en acciones violentas y la importancia de las organizaciones revolucionarias, pero no aparecieron demasiados partidarios abiertos de la guerrilla como estrategia de corto plazo en Uruguay.<sup>12</sup> Este cambio explica por qué el debate sobre la lucha armada, que había entorpecido la estrategia de la izquierda legal en el período anterior al golpe, en particular la fundación y participación electoral del FA, dejó de ser tan relevante para la reorganización de la coalición en el exilio.

La discusión sobre qué pasaría después del fin de la dictadura fue más importante en el debate sobre la pertinencia del FA. La política de alianzas tenía un papel fundamental en este sentido ya que se suponía determinante del régimen que la sucedería. En este debate estaba en juego la caracterización del régimen autoritario, aunque con frecuencia parecía que los contendientes carecían de herramientas ideológicas para cumplir la tarea de forma adecuada. Los izquierdistas uruguayos no participaron de lleno en las polémicas que se daban entre intelectuales exiliados de otros países sudamericanos.<sup>13</sup> La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas siguió líneas similares a las de años anteriores, pero la mayoría de los partidos y grupos reconocía ahora la predominancia de los sectores más comprometidos con la represión. También había acuerdo en definir a Uruguay como una expresión vernácula de un "fenómeno regional" en el que el "imperialismo estadounidense" jugaba un papel central, pero no había consenso sobre cuán similar era a sus vecinos, en especial cuando el PCU consideraba los lazos comerciales entre el gobierno argentino y la Unión Soviética.<sup>14</sup> La mayoría de la izquierda señalaba la novedad del régimen, que no debía confundirse con las "tradicionales dictaduras latinoamericanas", pero no había consenso sobre qué era lo que tenía de especial. ¿Su contenido de clase o sus métodos represivos? ¿Era el régimen sólo un método perfeccionado para barrer al "movimiento popular", una nueva expresión de los viejos intereses de la "oligarquía y el imperio"? ¿O debía analizarse como el resultado

de ajustes internos en el "bando oligárquico", con una renovada participación de los "sectores financieros" y el "imperio" en detrimento de la "burguesía nacional"? Y, de acuerdo con esto último, ¿era la "burguesía nacional" un aliado potencial que debía conquistarse? ¿Qué sucedería con una alianza de ese tipo luego de la derrota de la dictadura? ¿Obstaculizaría el avance de objetivos más radicales, socialistas y revolucionarios?

En términos generales, el PCU y el PS pensaban que era posible luchar unidos contra el gobierno autoritario, sin hacer ningún otro contrato sobre qué sucedería después. Al definir al régimen como "fascista", el PCU se refería a la vez a su contenido de clase y a la necesidad de una amplia alianza para la restauración de las "libertades democráticas", un reclamo que debía atraer a los "sectores democráticos de la burguesía". Los dirigentes comunistas también decían que las "libertades democráticas" no eran meros objetivos tácticos, sino parte fundamental de su concepción de la experiencia revolucionaria de Uruguay, y por tanto proponían una "democracia avanzada" como el "camino uruguayo hacia el socialismo". "Democracia vs. fascismo" pareció reemplazar a veces los anteriores eslóganes de "socialismo vs. fascismo" y "oligarquía vs. pueblo" como guía para la acción política inmediata, pero las "contradicciones económicas" y los intereses de clase siguieron siendo de principal importancia en la definición del régimen.<sup>15</sup> El PS no utilizaba por lo general esta definición de "fascista", pero solía coincidir con las opciones tácticas del PCU, aunque no está claro hasta qué punto adhería a los fundamentos detrás de la agenda comunista. Los socialistas uruguayos estaban en buenos términos con el Partido Socialista Español y eran miembros de la Internacional Socialista, lo que denotaba discrepancias con el prosoviético PCU.<sup>16</sup> En cualquier caso, es claro que tanto el PCU como el PS querían reorganizar el FA para representar los "intereses antioligárquicos y antiimperialistas", a la vez que convocaban a una alianza "democrática" más amplia con Ferreira Aldunate. Por el momento, consideraban suficiente lograr un acuerdo para abrir el proceso a la "participación popular" y rechazar los intentos de disfrazar la consolidación del régimen.

Otros grupos, como el recientemente creado Partido por la Victoria del Pueblo, subrayaron la importancia de reunir a los sectores más radicales de la izquierda a modo de barrera contra los "reformistas" y "burgueses" que integrarían la alianza opositora, es decir el PCU, el PS y Ferreira Aldunate. Luego de escapar de Buenos Aires, muchos militantes del PVP intentaron reagruparse para volver a Uruguay, especialmente en Brasil a partir de 1978. También buscaron mejorar sus relaciones con el resto de la izquierda. Debido a su rechazo de la política de raíz anarquista, los integrantes del PVP no habían formado parte del FA. Su participación en el "acuerdo de México" expresó un cambio profundo en ese sentido, pero no eliminó su aprensión en cuanto a una mera restauración de las viejas normas liberal-democráticas.<sup>17</sup> Erro compartía este temor, sumado a su conocida desconfianza por el modo "legalista" de entender la política del PCU. Al principio fue optimista en cuanto a la evolución política de Ferreira Aldunate y convocó insistentemente a una segunda reunión de los firmantes del "acuerdo de México" y todos los que apoyaran el "frente" supuestamente creado en 1977. Mientras el PCU y sus aliados sabotaban sus esfuerzos y repetían que ese frente no existía aún, Erro lanzó una cruzada para lograr que grupos y militantes anteriormente relacionados con la "corriente/tendencia" apoyaran su propuesta y rechazaran el FAE.

Muchos de los militantes independientes a quienes Erro pretendía conquistar tenían reservas con respecto al papel del PCU y el PS en la reorganización del FAE, pero no se decidieron a participar en una alianza permanente contra la coalición. Su principal preocupación eran los muchos grupos de solidaridad y comités locales que, desde su fundación a principios de los setenta, reproducían en el exterior la experiencia "movimientista" del FA antes del golpe. Cuando Argentina se transformó en un lugar inseguro para los refugiados latinoamericanos, una nueva oleada de uruguayos huyó hacia otros países de América y Europa y comenzó a participar en estas organizaciones que en ese entonces tenían una presencia mucho más extendida que cualquier partido o grupo. Generalmente estaban abiertos a uruguayos y nativos de los países de recepción y tenían una orientación

general de izquierda. Se dedicaban a denunciar los aspectos más urgentes de la represión, animar la admisión de nuevos refugiados y ganar el apoyo de sindicatos, partidos y gobiernos locales. La mayoría de sus miembros permanentes era independiente o simpatizante de grupos con estructuras laxas o dispersas. Los exiliados con claras afinidades partidarias, en particular aquellos que formaban parte de poderosas estructuras, tendían a prestar más atención a sus propios grupos. Se unían a comités locales y grupos de solidaridad para actividades específicas, lo cual solía complicar las relaciones con otros participantes más permanentes. Aunque la documentación interna con frecuencia revela esas tensiones, estas organizaciones locales por lo general no tomaron partido en las disputas de la izquierda y continuaron denunciando la situación uruguaya ante públicos amplios.<sup>18</sup>

Erro también intentó conquistar a figuras independientes que vivían en el exilio como el economista y ex rector de la Universidad de la República Samuel Lichtensztejn, el ex director de *Marcha* Carlos Quijano, ambos exiliados en México, y el escritor Mario Benedetti, que se había apartado de la debacle interna del 26 de Marzo y estaba viviendo en Cuba. El publicista y empresario Federico Fasano, que había sido anfitrión de la reunión de México en 1977, solía oficiar de nexo entre Erro y estas figuras. Aunque Fasano no era un dirigente político, buscó con ahínco la unidad de la izquierda en base al "acuerdo de México", es decir con independencia del viejo FA. Pero era más conciliatorio que Erro y no se oponía a la incorporación de la coalición como tal, algo que Erro sólo aceptó de mala gana luego de darse cuenta de que no tendría éxito en sus propios términos.<sup>19</sup> En cartas a potenciales adherentes a sus planes políticos, Erro con frecuencia se refería a sus comunicaciones con estos intelectuales para demostrar la cálida acogida que habían dado a su propuesta, pero el hecho es que se mostraron muy cautelosos. Al igual que Erro, desconfiaban del papel del PCU en el FAE, pero se negaron a firmar cualquier declaración formal para ponerse de su lado. De hecho, parecían bastante reacios a involucrarse en las disputas internas de la izquierda y dedicaban más tiempo y esfuerzos a sus propios proyectos.

Aunque participaban en reuniones y mesas redondas para discutir el caso uruguayo, su actividad política en el exilio disminuyó en comparación con el papel que habían tenido en Uruguay en años anteriores. Lichtensztejn estaba dedicado a su carrera académica, Benedetti prosperaba como escritor y Quijano buscaba continuar su publicación, cerrada en Montevideo en 1974 y reabierto en México como *Cuadernos de Marcha* en 1979.<sup>20</sup> Al tratar de incluir a estos intelectuales en sus planes, Fasano reprochó su “retirada” de la política.<sup>21</sup> A la inversa, figuras pro FAE, como Maggiolo, tuvieron una participación mucho más explícita en la militancia del exilio.

Un tema importante en la carrera por reclutar seguidores era la capacidad de los contendientes de ofrecer una propuesta concreta para la organización y la acción en las fragmentadas condiciones del exilio en un momento en que muchos empezaban a sentir ansiedad ante la consolidación del régimen autoritario. Quienes patrocinaron el “acuerdo de México” no fueron capaces de crear tal fórmula y asumieron un papel reactivo ante los promotores del FAE. Éste, que ya era una expresión tangible de unidad entre sus fuertes integrantes, terminó por ganar el apoyo de varios independientes y algunos pequeños pero importantes grupos de izquierda. Los GAU, por ejemplo, cercanos a Erro desde la fundación de la UAL en Buenos Aires, se unieron al FAE a principios de 1979 destacando que la coalición era una “herramienta útil” para la “acción inmediata”. Los dirigentes Ricardo Vilaró y Marta Ponce promovieron debates sobre la viabilidad de la coalición y consiguieron abrirla y hacerla más plural, algo similar a lo que el primero había ayudado a lograr en el movimiento sindical en el exilio. También otros militantes que habían adherido a la “corriente/tendencia” convocaron a la fundación de un grupo dentro de la coalición.<sup>22</sup> Dos reuniones cumplidas en 1979 en España expresaron esta nueva y más representativa configuración del FAE, con grupos adicionales y personalidades independientes como Alberto Pérez Pérez. En 1980, se unió Mario Benedetti. Aunque no desistieron de sus diferencias con el PCU en cuanto a su “enfoque legalista”, “agenda reformista” y “estilo autoritario”, su participación en el FAE significó una clara

reconfiguración de bandos, que dejó bastante aislados al grupo de Erro y al PVP.<sup>23</sup>

En febrero de 1980, estos dos sectores organizaron una concentración en Barcelona para recordar los comunicados de 1973 de las Fuerzas Armadas, insistiendo en que habían sido los únicos en prever la usurpación de los militares y rechazarla explícitamente. Un mensaje grabado de Erro y el orador del PVP mencionaron el “acuerdo de México” como la inspiración para su actividad conjunta y para cualquier otro “intento real de unir a la oposición”. Sin embargo, no ofrecieron ningún esquema convincente para concretar la propuesta.<sup>24</sup> A esta altura, era claro que el FAE estaba ya afianzado y que el “acuerdo de México” no resultaría una alternativa viable.

Además, algunos de los principales partidarios del FAE consiguieron la tan ansiada asociación con Ferreira Aldunate. La resultante Convergencia Democrática en Uruguay (CDU) se fundó el 19 de abril de 1980 en Nueva York. Juan Raúl, el hijo de Ferreira Aldunate, que había pasado los últimos años en Estados Unidos presionando en los círculos de decisión sobre política internacional, fue designado presidente de la nueva alianza. Justino Zavala, Diego Achard, Atilio Scarpa y Carlos Gurméndez firmaron la declaración constitutiva por el Partido Nacional y Luis Echave, Juan Eyherachar (ambos del PCU), Carlos Martínez Moreno (independiente, FA) y José Korzeniak (PS) rubricaron el documento en nombre de la izquierda.<sup>25</sup> Aunque los demás exiliados los conocían bien, no hicieron explícitas sus afinidades políticas y muchos firmaron como “escritor”, “estanciero”, “periodista” o “historiador” para subrayar el carácter no partidario de la CDU.<sup>26</sup>

Un mes después, el primer acto público de la nueva alianza conmemoró en México el cuarto aniversario de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, presentados como “héroes emblemáticos” y primeros partidarios de los “esfuerzos de convergencia”. Este tipo de apelación a mitos fundacionales fue una característica llamativa de la CDU. Su fundación el 19 de abril coincidió con el 155° aniversario del “Desembarco de la Agraciada”, el comienzo del movimiento que terminó con la dominación brasileña del territorio

que posteriormente sería Uruguay. Aunque la declaración constitutiva no lo mencionaba, la elección de esta fecha mostraba el deseo de recurrir a una arraigada tradición nacional (y oficial) como inspiración para luchar contra el régimen autoritario. Al igual que Ferreira Aldunate y muchos dirigentes de izquierda, la CDU solía referir a “las tradiciones democráticas del Uruguay” y al “espíritu nacional”, aludiendo a una unidad antiautoritaria que existiría más allá de las diferencias políticas e ideológicas. El primer documento del nuevo grupo citaba a Ferreira Aldunate, Seregni y, a falta de un dirigente colorado que participara en la CDU, José Batlle y Ordóñez, el líder histórico del Partido Colorado muerto en 1929. Con su homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz, J. R. Ferreira completaba el “panteón” de la oposición.<sup>27</sup> Bajo su presidencia, la CDU minimizó la importancia de las diferencias ideológicas internas para abogar por la democracia y los derechos humanos ante organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.

Esta retórica no partidaria era útil para atraer la atención internacional, pero no podía esconder los amargos resentimientos que había generado la creación de la CDU entre los grupos de la oposición ni su fracasado intento de construir una fuerza política que incluyera a todos. Los documentos y declaraciones de la CDU mencionaban entre sus antecedentes al FAE pero no al “acuerdo de México”. Muchos dirigentes y militantes de izquierda, incluso algunos que apoyaban al FAE, se sintieron excluidos de la nueva alianza o pensaron que no era lo suficientemente amplia. Algunos decían que era un desafortunado paso “a la derecha”. Otros, como el PVP, la recibieron positivamente pero pidieron que convocara a más integrantes. Erro tampoco fue invitado, aunque hasta último momento pensó que lo llamarían.<sup>28</sup> A pesar de las sospechas y acusaciones mutuas, estas exclusiones no eran sólo el resultado de confrontaciones dentro de la izquierda. El PCU, Erro y otros habían tratado de conquistar a Ferreira Aldunate por mucho tiempo. Para abandonar su renuencia a asociarse con la izquierda, el líder blanco juzgó cuidadosamente a los candidatos y pareció decidir que Erro, por ejemplo, no valía la pena. Sabía que éste no representaba más

que su propia opinión radical, no tenía una estructura formal para respaldar sus planteos y su atractivo popular se había diluido en el fragmentado contexto del exilio. El PCU, por el contrario, tenía muchos militantes y una poderosa estructura. Por supuesto, las luchas internas fueron importantes al dejar a algunos afuera de la nueva alianza, ya que la izquierda no presentó un frente unido, pero fue Ferreira Aldunate quien finalmente eligió a sus aliados dentro del dividido campo de pretendientes.

Para los elegidos, básicamente el PCU y el PS, los beneficios de asociarse con Ferreira Aldunate eran muchos, aparentemente tantos como para dejar de lado sus objeciones a dar un paso de ese tipo fuera de Uruguay. Aunque eran fuertes entre los exiliados uruguayos y tenían vínculos con organizaciones de derechos humanos, no podían llegar por sus propios medios a algunos foros internacionales, como el Congreso estadounidense. ¿Cómo podría un dirigente comunista que vivía en Moscú, por ejemplo, dirigirse a los congresistas y ser escuchado con respeto? Pero, a la vez, ¿cómo podría Ferreira Aldunate promover con éxito su liderazgo sin el apoyo real de los actos y concentraciones a los que con frecuencia se dirigía? El líder blanco supo aprovechar la eficiente organización y poder de respuesta de sus aliados. También veía en la CDU una herramienta para presentarse como la voz del “pueblo uruguayo” y no sólo como el dirigente de un partido político. Había sido el candidato presidencial más votado en las últimas elecciones pero sabía que sus “mayorías [eran] nacionales” y que generalmente se dirigía a exiliados de otras tiendas. Sin embargo, le costó que los blancos en Uruguay entendieran estas limitaciones. En una grabación enviada de forma clandestina, explicaba por qué alentaba la CDU a través de la presidencia de su hijo:

La lucha dentro de fronteras del Uruguay, debe plantearse dentro de los sectores en que tradicionalmente la sociedad uruguaya se divide [...] [pero] en el exterior la cosa es diferente. Nadie puede acceder a un gobierno, a una legislatura, a veces ni siquiera a un medio de difusión, invocando meramente una representación partidaria [...] La

lucha contra el régimen en el exterior debe hacerse y sólo puede hacerse invocando una condición nacional y reconociendo en los compatriotas simplemente eso, lo que son, compatriotas. En esa medida creo que tenemos que agradecer a aquellos ciudadanos, algunos de ellos ustedes saben bien que están muy cerca de mi corazón, que han emprendido la tarea de [...] aumentar el aislamiento que la dictadura uruguaya padece [...]<sup>29</sup>

Pero la CDU no fue sólo el resultado de consideraciones pragmáticas sobre cantidad de miembros y capacidades organizativas. También expresaba coincidencias coyunturales sobre temas políticos o, más precisamente, ponía de manifiesto cómo sus miembros se percibían mutuamente dentro de la coyuntura política. Estas percepciones se vieron afectadas por el triunfo de la revolución sandinista en 1979, que no sólo estimuló su esperanza de derrotar a la dictadura sino que también, y quizás más importante para la creación de la CDU, fue vista como la exitosa consumación de una alianza multiclasista y pluralista. Los dos Ferreira, padre e hijo, así como el PCU, expresaron muchas veces su confianza en que la experiencia nicaragüense fuera un ejemplo iluminador para la oposición uruguaya, dejando de lado el tema de la estrategia armada de los sandinistas.<sup>30</sup> Otros izquierdistas uruguayos compartían este optimismo sobre las posibilidades de la lucha popular en América Latina, pero no lo tomaron como una lección para aliarse con la "burguesía nacional".<sup>31</sup>

Además de estas reflexiones latinoamericanas, las definiciones de la oposición en este período incluían evaluaciones de los planes del régimen. Los intentos de unificación tuvieron lugar mientras las Fuerzas Armadas trataban de construir un marco legal más sólido para su gobierno. En agosto de 1977, por primera vez, las autoridades hicieron público un cronograma para reformular el sistema político.<sup>32</sup> La propuesta incluía la reorganización controlada de los partidos tradicionales, la redacción de una nueva Constitución con las disposiciones legales dictadas desde junio de 1976, su sometimiento a ratificación popular en 1980 y el llamado a elecciones nacionales en 1981 con un candidato predeterminado a la presidencia.<sup>33</sup>

Junto con la creación de un movimiento sindical oficialista, este programa apuntaba a dar una fachada legal al régimen en tiempos de creciente crítica internacional. Salvo por la élite económica y algunos pequeños sectores conservadores de los partidos tradicionales, el gobierno estaba también aislado internamente.<sup>34</sup> Los partidos vivían un estado de "animación suspendida", lo que significaba que no tenían actividad pública y que sin embargo mantenían "estrategias de supervivencia" para oponerse a la dictadura. Blancos y colorados formaron triunviratos provisorios, pero tenían poco trato entre sí y menos contacto aún con dirigentes sindicales, asociaciones comerciales y miembros de la Iglesia Católica. Los líderes del Frente Amplio lograron operar en la clandestinidad y permanecer en contacto con algunos militantes de base, pero sufrieron una terrible represión y alteraciones internas.<sup>35</sup>

A fines de los setenta, cuando enfrentaban una nueva ola represiva que incluyó más desapariciones, colaboración entre las fuerzas represivas uruguayas y argentinas y sentencias más duras para los presos políticos, los partidos y grupos de izquierda en la clandestinidad manifestaron su oposición a la "farsa" del gobierno autoritario. La mayoría del Partido Nacional expresó una opinión similar. Pero mientras las autoridades avanzaban en la ejecución de su programa, la oposición dividida, dentro y fuera del país, demostró ser incapaz de articular un plan de transición alternativo. Las propuestas de elegir una asamblea constituyente y de formar un gobierno provisorio no reunieron apoyos suficientes para promover acciones comunes. En junio de 1979, seis años después del golpe, la agencia de noticias Inter Press Service encuestó a varios líderes políticos para conocer su opinión sobre lo que estaba pasando en Uruguay. Aunque todos querían el retorno a la democracia, era claro que no podían concebir un plan conjunto.<sup>36</sup> En la raíz del éxito de la CDU (y del fracaso de otros intentos) estaba la decisión explícita de evitar objetivos de mediano y largo plazo, más allá de rechazar la propuesta de las autoridades y respaldar "los valores fundamentales en los que los uruguayos estamos de acuerdo".<sup>37</sup>

A mediados de 1980, según el cronograma anunciado, el gobierno presentó a delegados de los partidos tradicionales un proyecto

de nueva Constitución a ser ratificado en un plebiscito programado para noviembre. El proyecto establecía el papel permanente de los militares en el Ejecutivo y otorgaba a las Fuerzas Armadas poderes de veto sobre las acciones de futuros gobiernos. También preservaba el tradicional sistema bipartidista e imponía una serie de restricciones a la participación política y la organización sindical.<sup>38</sup> Bajo severa represión y censura, los sectores de oposición de los partidos tradicionales y la izquierda que actuaba dentro del país promovieron el voto por el no. Lo mismo hizo la oposición en el exilio. Muchos eran pesimistas en cuanto al desenlace del plebiscito porque pensaban que la represión había tenido cierto éxito entre la ciudadanía o que el gobierno manipularía los resultados. De hecho, el anuncio de que la propuesta autoritaria había sido rechazada por el 57% contra el 43% de los votos válidos sorprendió tanto a la oposición como a las autoridades. Es muy probable que el gobierno haya esperado un resultado favorable en vistas de que sólo dos meses antes un intento similar en Chile había dado a Pinochet otros ocho años en el poder y un estricto control sobre una futura transición a la democracia. En cualquier caso, el sorprendente triunfo de la oposición, así como el reconocimiento de la derrota por parte del gobierno, resultó en una “inesperada apertura” de la situación política en Uruguay. Más allá de muchos matices y diferencias implícitos en el voto por el no, era claro que la mayoría de los ciudadanos estaba en contra del orden autoritario y quería volver a la democracia. Esta evidente expresión de voluntad democrática abrió un espacio para la participación política y forzó no sólo al gobierno sino también a la oposición dividida a redefinir sus fines y medios, dentro y fuera del país.<sup>39</sup>

#### PARTICIPACIÓN EN REDES DE DERECHOS HUMANOS

Mientras que los intentos de crear una alianza opositora tuvieron un éxito sólo relativo, la participación en las redes de derechos humanos floreció en los años anteriores al plebiscito de 1980. Entre 1976 y 1980, los exiliados desarrollaron una estrecha colaboración con

grupos transnacionales de derechos humanos y aprendieron a dominar el lenguaje y los procedimientos necesarios para plantear reclamos ante foros internacionales. Los diferentes grupos y partidos de la izquierda uruguaya generalmente se unían en estos esfuerzos de denuncia. Aunque no todos tenían las mismas habilidades y comprensión de las sutilezas de la diplomacia internacional, generalmente lograban construir un planteo común. La segunda mitad de los setenta fue una época favorable para este tipo de actividad, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno estadounidense, por nombrar tres de los participantes más influyentes en el caso uruguayo, desplegando su autoridad para intentar que se respetara la legislación internacional de derechos humanos.

Tal como argumenta un académico estadounidense, a mediados de los setenta “no se necesitaba un ingeniero nuclear para entender que la moralidad de la política exterior [...] sería un buen tema de campaña para los demócratas.”<sup>40</sup> Las consecuencias de la Guerra de Vietnam, Watergate y el golpe de Estado en Chile eran lo suficientemente claras. Como candidato presidencial, Jimmy Carter, que era ingeniero nuclear, había insistido en el tema de los derechos humanos discurso tras discurso. Su asunción en 1977 reanimó los esfuerzos del Congreso para profundizar su agenda en este sentido. Ese año se promulgó una tercera ley general de derechos humanos denominada Ley de Asistencia Financiera Internacional. Esa ley “autorizaba e instruí” a los representantes estadounidenses en instituciones financieras internacionales a oponerse a cualquier ayuda a países involucrados en un “patrón consistente de violaciones graves”. La nueva administración se opuso porque la ley restringía la capacidad de maniobra del Ejecutivo en política exterior. También el Departamento del Tesoro y las instituciones financieras internacionales argumentaron contra las directrices “políticas” en terrenos “puramente económicos”.<sup>41</sup> A pesar de su oposición a esta medida particular y algunas agudas inconsistencias posteriores, Carter reformó efectivamente la política exterior de su país suspendiendo la ayuda militar a los regímenes autoritarios latinoamericanos, favoreciendo un

compromiso más fuerte en organizaciones multilaterales e internacionales y creando el aparato institucional para un fuerte programa de derechos humanos.<sup>42</sup> En el Departamento de Estado, lo que había sido una "oficina" de derechos humanos fue elevado a "bureau" y Patricia Derian, activista de derechos civiles en el sur de Estados Unidos, asumió el cargo de Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios. Junto con Cyrus Vance, el nuevo Secretario de Estado, Derian se preocupó por la situación del Cono Sur, promovió sanciones y favoreció una relación estrecha con los grupos de derechos humanos.

La administración Carter criticó generalmente al gobierno uruguayo y, cada vez que el Departamento de Estado o el sistema consultivo presidencial flaquearon en su compromiso, el Congreso se las arregló para reafirmar su oposición al régimen autoritario. Las nuevas "redes de información" descritas en el capítulo anterior estaban en su apogeo: los informes y la participación en el Congreso de organizaciones no gubernamentales eran ya herramientas sistemáticas de la política exterior, mientras los funcionarios estadounidenses en el mundo se mostraban receptivos a los reclamos de derechos humanos.<sup>43</sup> En agosto de 1977, Lawrence Pezzullo reemplazó a Ernest Siracusa como embajador en Montevideo. A diferencia de su predecesor, el nuevo embajador era crítico del régimen y abierto a los pedidos de familiares de presos políticos y desaparecidos.<sup>44</sup> En diciembre de 1977, durante un viaje a Uruguay, el Teniente General Dennis McAuliffe, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, volvió a plantear la posición de su gobierno frente a los militares, lo que provocó una furiosa reacción.<sup>45</sup> En resumen, desde 1977 hasta 1981 Uruguay mantuvo una valoración negativa en los *Country Reports* y no recibió ayuda militar estadounidense. Sin embargo, los asuntos económicos no estuvieron tan claramente dominados por la nueva agenda: aunque los delegados estadounidenses en instituciones financieras internacionales se opusieron a los préstamos a Uruguay, los fondos fueron aprobados porque Estados Unidos no presionó a sus socios para que votaran en contra.<sup>46</sup>

Los exiliados uruguayos señalaron las inconsistencias de la política exterior estadounidense. La mayoría de los grupos y partidos de izquierda reconocía que Washington era un frente importante de lucha contra la dictadura, pero también consideraba la política de derechos humanos de Carter como una nueva maniobra para preservar la hegemonía y deshacerse de colaboradores que sólo avergonzaban a sus aliados. En palabras del PVP: "No hay entonces más moralidad [en Carter] que la necesaria para la eficacia en el ejercicio de la dominación."<sup>47</sup> Estos grupos y partidos seguían señalando la responsabilidad de Estados Unidos en el afianzamiento del autoritarismo en el Cono Sur, mientras notaban el acuerdo básico entre las políticas económicas de estos regímenes y los intereses imperiales en la región y rechazaban todo intento de limpiar su historial:

Quando una parte sustancial de la tarea sucia [de aniquilar a las organizaciones sindicales y populares] ya ha sido cumplida y cuando la rebeldía interna y la condena internacional elevan en un grado peligroso las denuncias contra los aspectos más terroristas implicados en su estrategia global, la administración Carter levanta la cortina de humo de la violación de los derechos humanos [...] Pero nadie ha escuchado ni una sola palabra de condena del gobierno ni las grandes empresas norteamericanas contra la política económica que los propios Estados Unidos diseñaron y que las dictaduras sureñas se esfuerzan por aplicar con el mayor esmero.<sup>48</sup>

Los comunistas compartían esta opinión y explicitaban las razones por las cuales de todos modos aplaudían el giro de la política exterior estadounidense:

[R]epresentantes de la actual Administración de Estados Unidos se ven obligados en el presente a determinados actos y medidas condenatorias de un régimen creado directamente a inspiración del imperialismo de EEUU. Nadie se hace ilusiones acerca de la vocación democrática de Washington, pero las modificaciones en las formas políticas que el imperialismo practica en América Latina se suman, en este momento,

como una dificultad más para la dictadura de Uruguay sentada internacionalmente en el banquillo.<sup>49</sup>

Aunque menos radical que los exiliados de izquierda, Ferreira Aldunate era también cauto con respecto a los resultados de la nueva actitud de Estados Unidos hacia los regímenes autoritarios latinoamericanos.<sup>50</sup> Pero no dejaba de notar que su comparecencia ante el Congreso en 1976 había hecho conocer la situación uruguaya entre los responsables de la política exterior estadounidense, además de promocionar su liderazgo entre los exiliados y demostrar que apelar a foros internacionales y gobiernos extranjeros no sólo era posible sino que valía la pena. Cuando Ferreira Aldunate volvió a Londres para continuar su actividad política, su hijo Juan Raúl decidió quedarse en Estados Unidos para trabajar sobre el caso uruguayo. Según su propio testimonio, pronto encontró empleo, adquirió fluidez en el manejo del idioma, estableció conexiones claves con grupos de derechos humanos y congresistas y logró involucrarse formalmente con organizaciones dedicadas a presionar sobre temas de política exterior.<sup>51</sup>

Su primer proyecto importante en Washington fue una campaña de recolección de firmas por la liberación del General Seregni, un claro gesto de buena voluntad hacia la unidad de la oposición.<sup>52</sup> Pero su principal logro en este período fue su trabajo como “asociado” en la Washington Office on Latin America (WOLA) desde 1976 hasta 1979. Desde su fundación en 1974, por una coalición de académicos y personas vinculadas a la iglesia, WOLA actuó como proveedora de información y “facilitadora del diálogo” entre aquellos que tenían interés en las relaciones interamericanas. Pronto se transformó en uno de los grupos más influyentes en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, con fácil acceso a los responsables de la elaboración de políticas y a organizaciones internacionales. Juan Raúl aprovechó su participación en WOLA para mantener informados a otros exiliados sobre lo que estaba sucediendo en Washington. Su trabajo y el apoyo del director de WOLA, Joe Elridge, hicieron que la Oficina prestara mayor atención a Uruguay en esos años, controlara la posición de Estados Unidos, especialmente el desempeño

del embajador Pezzullo en Montevideo, y llamara la atención sobre el caso uruguayo en foros internacionales.<sup>53</sup> Sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvieron una recepción particularmente favorable.

La CIDH recién había comenzado a probar los límites de su mandato para “ayudar en la defensa de los derechos humanos” en el continente americano. Establecida en 1959 en el espíritu de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión adquirió competencia para iniciar investigaciones y recibir reclamos por el Protocolo de Buenos Aires de 1967. En ese momento, sin embargo, los derechos humanos no eran importantes a nivel hemisférico ya que no estaban en el centro de las preocupaciones de Estados Unidos, el integrante más poderoso de la OEA. La administración Carter marcó un cambio a este respecto y apoyó la aplicación de la legislación interamericana. Aún antes de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1978, siete expertos independientes de la CIDH, elegidos en calidad individual por la Asamblea General de la OEA, trabajaron para establecer criterios aplicables a los Estados miembros. Andrés Aguilar, un eminente abogado internacional venezolano, ocupó la presidencia de la Comisión a fines de los setenta, cuando la dura represión en el Cono Sur hizo que ganara relevancia pública. Desde su sede en Washington, la CIDH comenzó a investigar e informar sobre violaciones de derechos humanos y recibió reclamos de individuos y organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas por un Estado miembro de la OEA, como WOLA. Cuando la información resultaba suficientemente incriminatoria, la CIDH preparaba informes sobre los Estados para que la Asamblea General actuara. Con este fin, la Comisión se acercaba al gobierno acusado para obtener su permiso de llevar a cabo una observación *in loco* y así complementar la información de la que ya disponía.<sup>54</sup>

A fines de 1976, el caso uruguayo había alcanzado ese punto. Desde 1973, la CIDH había recibido más de doscientas denuncias de serias violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones. En su sesión de



octubre-noviembre de 1976, la Comisión decidió preparar un informe sobre la situación de derechos humanos en el país y se acercó al gobierno para solicitar autorización para una observación *in loco*. El presidente Aguilar se reunió confidencialmente con José María Araneo, Delegado Alternativo de Uruguay ante la OEA, para investigar la posibilidad de una invitación de su gobierno. A principios de 1977, la Comisión recibió a dos delegados especiales del gobierno uruguayo y acordó esperar hasta marzo para obtener una respuesta oficial. Poco después de esa fecha, Araneo informó a la OEA que su gobierno no podía considerar la visita “por razones jurídicas de orden interno e internacional; por aspectos vinculados a la soberanía nacional; por considerar que no existe mérito jurídico para aceptar un procedimiento tan especial [...] y por mediar motivos de oportunidad.” Aún así, la CIDH preparó un informe detallado y lo entregó al gobierno en mayo de 1977. Un mes después, en la Asamblea General de la OEA reunida en Grenada, los representantes uruguayos respondieron al informe y protestaron por los procedimientos de la Comisión. En noviembre, al juzgar que las observaciones del gobierno eran insatisfactorias, la Comisión decidió solicitar formalmente permiso para visitar el país. El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Alejandro Rovira, envió una rápida negativa donde se quejaba nuevamente por “los procedimientos, [...] la falta de objetividad y tono con que la CIDH encaró su informe.”<sup>55</sup>

Como “la negativa de dicho Gobierno [a colaborar] no impide ni excusa a la Comisión de cumplir con sus deberes estatutarios”, en febrero de 1978 la CIDH presentó a la Asamblea General su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Uruguay”. Luego de una larga introducción en la que se relataba la negociación anterior, se incluía un estudio de las normas legales vigentes en el país y una descripción de la situación de derechos humanos de acuerdo con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El informe concluía que “en el Uruguay se han cometido graves violaciones contra [...] el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; el derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento; el derecho de justicia; el derecho a

proceso regular; el derecho de reunión y asociación; y el derecho de sufragio y de participación en el gobierno.” Las últimas páginas comprendían una serie de recomendaciones al gobierno uruguayo para terminar con las violaciones y reparar los daños.<sup>56</sup> En julio de 1978, la Asamblea General respaldó el informe y pidió a la Comisión que lo actualizara anualmente para seguir la situación del país sudamericano. Un tiempo antes, la Asamblea, con el apoyo de Estados Unidos, había rechazado la propuesta del gobierno uruguayo de ser anfitrión de la reunión del organismo en 1978.<sup>57</sup>

Enfrentado al fracaso de su diplomacia, el Ministro Rovira renunció a su cargo a mediados de 1978 y fue sucedido por Adolfo Folle Martínez. Funcionarios estadounidenses señalaron el supuesto esfuerzo de algunos sectores militares por promover una actitud más razonable ante la crítica internacional y fueron particularmente entusiastas en cuanto a la recepción favorable de la misión de la American Bar Association (ABA) en abril de 1978. Creían “que la gentil actitud del General Álvarez y sus colegas, que orquestaron la visita y alcanzaron el entendimiento final con la misión de la ABA, está directamente relacionada con las necesidades políticas de Álvarez [...] y sus conocidas ambiciones presidenciales.”<sup>58</sup> Aunque sin duda existían diferentes opiniones y luchas por el poder en el gobierno uruguayo, el Departamento de Estado no tenía razón para esperar ninguna mejoría. De hecho, la situación de los derechos humanos no mejoró en los años siguientes: actualizaciones consecutivas del primer informe de la OEA subrayaron que la situación permanecía sin cambios, investigaron denuncias recientes y siguieron solicitando una observación *in situ*.<sup>59</sup>

→ WOLA y Juan Raúl Ferreira fueron esenciales para atraer la atención de la CIDH sobre el caso uruguayo y presionar para que solicitara una visita. En febrero de 1977, dos miembros del Subcomité de Asistencia Exterior del Senado de Estados Unidos, Jacob Javits y Hubert Humphrey, escribieron al Presidente Aguilar para pedir que la Comisión visitara Uruguay. Para apoyar su solicitud citaron “información divulgada en audiencias ante la Cámara de Representantes” y “nueva evidencia” presentada por WOLA.<sup>60</sup> La Oficina

también colaboró con Robert Goldman, el abogado de la OEA que preparó el informe de la CIDH sobre Uruguay y citó a WOLA como fuente de información. En noviembre de 1977, Joe Elridge y Jo Marie Griegraber, director y subdirectora de WOLA, testificaron ante la CIDH sobre el caso uruguayo. En preparación para la Asamblea General de 1978, la Oficina imprimió y distribuyó a 4.500 personas un folleto sobre la situación uruguaya, envió éste y otros materiales a embajadores y ministros extranjeros, convocó conferencias de prensa y presionó a los funcionarios en Washington. Fue en representación de WOLA que J. R. Ferreira se dirigió a la CIDH y participó como observador en las reuniones de la OEA que trataban el caso de su país en 1977 y 1978. Hasta 1979, cuando dejó WOLA para trabajar en Nueva York para otro grupo de derechos humanos, solía enviar cartas a otros exiliados para mantenerlos informados sobre los esfuerzos de denuncia que se estaban realizando.<sup>61</sup>

→ Muchos izquierdistas uruguayos colaboraron con Juan Raúl Ferreira, le proporcionaron información y se dirigieron a la CIDH. Una rápida lectura de los cientos de denuncias presentadas a la Comisión en los años setenta muestra que la mayoría de los partidos y grupos de izquierda no objetaba este mecanismo, como tampoco lo hacían los familiares de presos y desaparecidos. Entre estos casos, había miembros del PCU, el PVP, los GAU y los tupamaros, cuatro grupos muy diferentes y fuertemente afectados por la represión. Todos celebraron las decisiones de la OEA de condenar el régimen uruguayo. Esto implicaba cierta revisión de sus ideas sobre el papel de las organizaciones internacionales, particularmente la OEA, a la que hasta entonces habían considerado una mera fachada del imperialismo de Estados Unidos y una herramienta para violar la soberanía de los países latinoamericanos. Cuando la CIDH comenzó a condenar las violaciones de derechos humanos en países bajo regímenes autoritarios de derecha, tanto los izquierdistas que protestaban como los gobiernos denunciados se sorprendieron. En el caso de los exiliados uruguayos, la nueva valoración de la CIDH fue más una reformulación que un rechazo de sus opiniones anteriores. En términos

generales, decían que Estados Unidos y la OEA abandonaban a estos regímenes sólo porque la oposición había ganado apoyo internacional y expuesto la brutalidad de estos gobiernos que habían crecido con ayuda estadounidense. Según este planteo, habían sido los exiliados, y no la administración Carter, quienes habían logrado el aislamiento internacional de la dictadura uruguaya.<sup>62</sup>

Aunque este análisis minimizaba muchos factores importantes, en particular la complejidad de la política estadounidense y las motivaciones de los activistas norteamericanos de derechos humanos, los exiliados estaban en lo cierto a destacar su propio mérito. Mientras que el golpe de Estado de 1964 en Brasil había sido escasamente registrado por el sistema interamericano, en los años setenta los denunciantes chilenos, uruguayos y argentinos inundaron la OEA con sus reclamos.<sup>63</sup> Esto sucedió no sólo porque Carter había planteado un escenario favorable, sino también porque estos denunciantes supieron conectarse con el mundo entero a través de una fuerte red de vínculos personales e institucionales y presentarse como poseedores de derechos garantizados constitucional e internacionalmente. Tan pronto se dieron cuenta de que sus reivindicaciones no encontrarían respuesta a nivel local, los exiliados uruguayos recurrieron a la arena internacional. Las denuncias ante la CIDH eran formalmente sólidas, detallaban cada violación de derechos humanos de acuerdo con la legislación nacional e internacional y evitaban apelar a la identificación partidaria con las "víctimas de abusos de derechos humanos". Provenientes de un país con una larga tradición democrática, un sistema institucionalizado de partidos y una sociedad relativamente integrada, estos activistas educados de clase media ya eran conscientes de sus derechos en el ámbito internacional, aún cuando los hubieran antes desestimado en nombre de objetivos más radicales. Esta misma comprensión fundamentó sus denuncias ante las Naciones Unidas, que también involucraron a una amplia variedad de exiliados y grupos de derechos humanos. Un rápido examen de las acciones de la ONU en esos años pondrá de relieve las habilidades que habían desarrollado muchos uruguayos.

A mediados de los setenta, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU enfrentaba la disyuntiva de acusar a Uruguay de un "patrón consistente de violaciones graves" de forma pública o privada, según los detallados procedimientos de la resolución 1503 del Consejo Económico y Social. La resolución, aprobada en 1970, expresaba los intereses en conflicto de las potencias mundiales en tiempos de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían que la maquinaria de derechos humanos de la ONU se concentrara sobre la otra parte, a la vez que rechazaban toda crítica a sí mismos y sus aliados. La resolución 1503 era una salida de compromiso que abarcaba tres objetivos: actuar en casos individuales, acusar gobiernos y alentar el diálogo con los mismos. Todo el procedimiento era confidencial. Pero la confidencialidad no fue suficiente para que los gobiernos aceptaran cooperar. En los años setenta, esta forma de funcionamiento demostró sus fallas: los gobiernos entraban y salían de la "lista negra" sin ninguna mejora visible y ni una sola vez la ONU decidió publicar sus resultados a modo de protesta. El golpe de Estado en Chile tuvo un fuerte impacto en estos procedimientos: además de lograr que la definición de "violaciones graves" incluyera explícitamente la detención arbitraria, la tortura y la desaparición, abrió la puerta para que las organizaciones no gubernamentales participaran más directamente en el trabajo de la Comisión y aseguró que la Unión Soviética se integrara a los esfuerzos de derechos humanos de la ONU. Por otro lado, en 1976 entró en vigencia un Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que permitía a individuos presentar reclamos contra sus gobiernos ante el Comité de Derechos Humanos. La mayoría de los países que lo suscribieron tenía poco que temer. Uruguay fue una excepción: el régimen autoritario no se retiró del Pacto y el Protocolo, con lo que se le abrió otro frente de lucha.<sup>64</sup>

➔ En 1976, Uruguay ingresó en la "lista negra" confidencial de la resolución 1503, cuando el representante cubano presentó el caso a la Comisión de Derechos Humanos. Los exiliados uruguayos apoyaron esta iniciativa y familiares de presos y desaparecidos viajaron a Ginebra para testificar.<sup>65</sup> En 1977, aunque Uruguay no estaba aún

en la agenda, el ex senador Enrique Erro se dirigió a la Comisión en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos con base en París. Describió su propia experiencia como uruguayo encarcelado en Argentina, detalló los métodos de tortura y las condiciones de prisión, denunció la violación de los reglamentos legales de asilo político y expuso la situación general de los derechos humanos en los dos países sudamericanos. En la misma reunión, el representante de Estados Unidos Brady Tyzon habló sobre Chile y resaltó las similitudes entre los regímenes autoritarios del Cono Sur. El delegado uruguayo Carlos Giambruno salió en defensa de estos regímenes que sólo "habían restringido algunos derechos" para defender "libertades amenazadas". Dijo que Erro era un "enemigo político" de su gobierno y rechazó las "arrogantes" palabras del estadounidense.<sup>66</sup> El asunto quedó sin resolver. Un año después, la Comisión trató formalmente por primera vez el caso uruguayo. Erro, Ferreira Aldunate, E. Rodríguez, Cores y familiares de desaparecidos viajaron a Ginebra, mientras que en otros países los exiliados se organizaron para presionar.<sup>67</sup> Sin embargo, el tema quedó nuevamente sin resolver. A diferencia de sus pares en la OEA, Giambruno pudo convencer a los diplomáticos de la ONU de que su gobierno deseaba cooperar, con lo que logró contrarrestar la presión de los exiliados y los grupos de derechos humanos.<sup>68</sup>

Un grupo de uruguayos radicado en Ginebra coordinó las actividades de los exiliados, preparó expedientes y representó a las partes denunciadas. También se emprendieron acciones confidenciales, como los intentos de dirigentes del PCU para convencer a representantes de la Unión Soviética de votar contra la dictadura uruguaya.<sup>69</sup> Además, los exiliados y los activistas de derechos humanos utilizaron el protocolo que permitía que individuos presentaran reclamos contra sus gobiernos ante el Comité de Derechos Humanos de acuerdo a los procedimientos que habían entrado en vigencia en 1976. Moriana Hernández, una uruguaya que vivía en México, estuvo entre los primeros en hacer uso de este mecanismo. A principios de 1977, apeló en nombre de su padrastro, el mundialmente conocido matemático y dirigente del PCU, José Luis Massera. El caso de Massera

fue el primero en ser examinado por los dieciocho abogados internacionales que formaban el Comité. En abril de 1978, este organismo encontró que su detención violaba nueve disposiciones claves del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Meses después se hizo pública la decisión, en lo que los activistas de derechos humanos vieron un gran paso hacia una política más enérgica de derechos humanos en la ONU.<sup>70</sup> Con el firme estímulo de AI, los exiliados continuaron usando este mecanismo que sólo estaba disponible para individuos que quisieran denunciar a sus propios gobiernos.<sup>71</sup>

Estos esfuerzos coordinados de los exiliados uruguayos y los grupos de derechos humanos fueron el antecedente de la reunión de 1979 de la Comisión de Derechos Humanos. Luego de examinar el caso uruguayo durante tres años, la Comisión tenía cuatro opciones: desecharlo, mantenerlo en la misma situación, enviar un emisario a Uruguay o abrirlo al público. Según informes de exiliados que siguieron atentamente la reunión, existían posibilidades de que la Comisión creara un "grupo de trabajo" sobre Uruguay, probablemente la medida más fuerte de que se disponía. Pero dos factores muy diferentes obstaculizaron esta decisión. Por un lado, el representante uruguayo en la ONU demostró una vez más sus habilidades diplomáticas y presentó con éxito los planes institucionales de su gobierno como esfuerzos democratizadores. Por otro lado, la lógica de la Guerra Fría volvió a prevalecer sobre las preocupaciones de derechos humanos: Estados Unidos se negó a apoyar cualquier investigación que no incluyera el caso de Etiopía, mientras la Unión Soviética bloqueaba todas las acciones contra el país africano. Esto explica por qué la Comisión eligió la opción menos severa de establecer contactos directos con los gobiernos de Uruguay y Etiopía.<sup>72</sup>

La Comisión acudió al Secretario General de la ONU Kurt Waldheim para que designara un emisario para Uruguay. En agosto de 1979, el presidente Aparicio Méndez respondió por escrito que su gobierno estaba dispuesto a colaborar. En diciembre, el secretario de asuntos políticos de Waldheim, Javier Pérez de Cuéllar, salió desde Nueva York hacia Montevideo. Era un hombre de vasta experiencia que había ingresado al entorno de Waldheim en 1975 para manejar

misiones delicadas y ocuparse de los asuntos latinoamericanos. Su nueva y sensible misión era investigar la cárcel uruguayo para presos políticos más grande y más conocida, que debía el absurdo nombre de Libertad a un pueblo cercano del mismo nombre. Poco antes de su partida, Pérez de Cuéllar se reunió con Theo Van Boven, el director holandés de la División de Derechos Humanos de la ONU, que actuaba como secretaria de la Comisión. Van Boven recordó al emisario que su División quería información de primera mano sobre individuos detenidos, en particular Massera y el famoso pianista argentino Miguel Estrella, cuya familia y amigos también habían apelado al Comité de Derechos Humanos. Sin embargo, Pérez de Cuéllar veía su misión de otro modo: estaba más preocupado por mostrar respeto por la soberanía del Estado uruguayo, mediante un enfoque confidencial, cauto y flexible, que en probar la existencia de violaciones de derechos humanos.<sup>73</sup>

Todavía no se sabe cómo fue que los informes de Pérez de Cuéllar y de la Cruz Roja se filtraron casi al mismo tiempo, a principios de 1980. Lo que es claro es que la exposición simultánea demostró cuán capcioso era el reporte del emisario de la ONU. Donde Jean-Francois Labarthe, un miembro experimentado del equipo de la Cruz Roja, había percibido "vidas angustiadas y empobrecidas", "trastornos psicológicos" y "aislamiento silencioso", Pérez de Cuéllar había visto condiciones de prisión "extremadamente razonables". Mientras Labarthe había visitado prisioneros que "ya no pueden expresar ninguna necesidad", el enviado de la ONU había encontrado detenidos "saludables", entre ellos Massera y Estrella.<sup>74</sup> Estos casos eran demasiado conocidos en la comunidad de derechos humanos como para que su mención pasara inadvertida. Estaba previsto que el informe de Pérez de Cuéllar fuera examinado en la reunión de la Comisión de febrero de 1980. Los exiliados y los grupos de derechos humanos se prepararon para exponer sus fallas. El nombre clave en este asunto fue Alejandro Artucio, un abogado uruguayo, defensor de presos políticos exiliado en Europa, que estaba trabajando para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Sus vínculos con el Secretario General de la CIJ, Niall Mac Dermot, se remontaban a la

misión conjunta CIJ-AI a Uruguay en 1974, cuando Artucio estaba en la cárcel por sus actividades políticas. Luego de que llegara a Europa, Mac Dermot le ofreció el cargo de especialista latinoamericano de la CIJ en Ginebra. En tal carácter, Artucio decidió responder las mentiras del informe de Pérez de Cuéllar. Telefonó a Estrella, que había sido liberado y vivía en París, y lo invitó a Ginebra para testificar. Estrella aceptó y escribió un memorando en el que negaba que un emisario de la ONU lo hubiera visitado nunca.<sup>75</sup>

Era un cargo serio contra un funcionario superior de la ONU y Van Boven se las arregló para hacer circular el memorando. El presidente del grupo que estudiaba la "lista negra" de la resolución 1503 lo leyó en público ante la indignación del delegado uruguayo. Una vez más, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se enfrentaba con un dilema: ¿debía dar crédito a Pérez de Cuéllar y desechar el caso o debía reprender al emisario y tomar nuevas medidas? La nota de Estrella fue el factor decisivo contra el gobierno uruguayo. El presidente recomendó que el caso quedara registrado en los archivos de la ONU, que Uruguay siguiera bajo escrutinio y que Waldheim persistiera con los contactos directos. Esta decisión expresaba una solución de compromiso entre opiniones encontradas dentro de la ONU, con el cauto Pérez de Cuéllar en un extremo, alineado con el régimen autoritario, y el audaz Van Boven en el otro, del lado de los grupos de derechos humanos. Esta solución sugería también que la política de Carter en la ONU había perdido empuje bajo el ataque de los críticos internos que la responsabilizaban por el derrocamiento de dos de los más firmes aliados de Estados Unidos: Somoza en Nicaragua y el Shah de Irán.<sup>76</sup> Irán, Nicaragua y la invasión soviética de Afganistán marcaron un cambio profundo en la política mundial y provocaron una nueva actitud en Washington. En los últimos años de la administración Carter, el gasto militar aumentó y los derechos humanos se subordinaron a preocupaciones estratégicas.

Entre los participantes uruguayos, la resolución de la ONU despertó sentimientos mezclados. Aunque Giambruno había esperado que la Comisión dejara el caso de lado, celebró la decisión final porque bloqueaba la creación de un grupo de trabajo y mantenía la

confidencialidad de la investigación. Asimismo, los exiliados y los grupos de derechos humanos se mostraron medianamente satisfechos ya que el caso todavía estaba en la agenda de la Comisión y habían logrado desenmascarar a Pérez de Cuéllar. Pudieron exponer también algunas de las estrategias de Giambruno, en particular su presentación de cartas supuestamente enviadas a Waldheim por ciudadanos uruguayos que se oponían a la campaña de derechos humanos. Los exiliados hicieron públicos algunos documentos que probaban que el gobierno uruguayo había distribuido modelos de cartas entre los soldados y sus familiares, exhortándoles a escribir a la ONU.<sup>77</sup> Esta campaña era sorprendentemente similar a los esfuerzos de AI, lo que demostraba que el régimen también había aprendido algunos métodos del activismo transnacional.<sup>78</sup> Los exiliados y los grupos de derechos humanos también apoyaron la creación de un grupo de trabajo sobre desapariciones que aceptaría casos uruguayos. Para alcanzar esa meta, Carmen (Tota) Almeida de Quinteros se dirigió a la Comisión en representación de Pax Romana, una organización internacional de profesionales e intelectuales católicos que tenía una relación consultiva con la ONU. Presentó el caso de dos niños uruguayos que habían desaparecido con sus padres en Buenos Aires en 1976, recientemente encontrados con vida en Chile, y el de su propia hija, Elena Quinteros, secuestrada por las fuerzas represivas en Montevideo. La Comisión creó el grupo de trabajo y en 1980, cuando comenzó a recibir reclamos, muchos casos uruguayos entraron en su agenda.<sup>79</sup> Los exiliados habían logrado una vez más presentar sus reclamos al más alto nivel posible.

#### DEBATES DE DERECHOS HUMANOS

Los esfuerzos de denuncia de los exiliados ante organizaciones internacionales demostraron su creciente capacidad para cooperar con grupos de derechos humanos y usar su lenguaje y sus métodos. Los uruguayos entendían la importancia de esta cooperación: "Usted ha llegado a un lugar al que nunca llegué como senador", dijo el

dirigente comunista Enrique Rodríguez a Tota Quinteros cuando ésta habló ante la ONU.<sup>80</sup> Los exiliados también sabían que la política mundial y local influían en sus actividades de presión y resultaban en mayor o menor influencia sobre los foros internacionales. Su trabajo y nivel de organización aumentaron durante este período, ampliando sus contactos y alianzas a lo largo y ancho del mundo en un maduro ejemplo de activismo transnacional. En este campo, los exiliados pudieron superar sus diferencias y actuar conjuntamente. Lograron incluso aprovechar sus divergencias políticas para alcanzar sus objetivos: los dirigentes comunistas trataban de convencer a los delegados soviéticos de votar contra Uruguay en la ONU y Juan Raúl Ferreira persuadía a los congresistas estadounidenses de escribir a la CIDH, por mencionar sólo dos ejemplos. Pero su fracaso para crear una verdadera alianza de oposición indica que la confluencia en temas de derechos humanos no era suficiente para sostener una acción política común.

A primera vista, el lenguaje de derechos humanos parecía una base plausible para la unidad, dado que se trataba de un discurso persuasivo, capaz tanto de expresar una plataforma básica inmediata como de evitar definiciones controvertidas acerca de los objetivos de largo plazo. De hecho, los diferentes participantes en las redes latinoamericanas de derechos humanos tenían poco en común más allá de su interés en detener las violaciones y hacer que se cumpliera un conjunto de normas básicas para la participación política. A fines de los setenta y principios de los ochenta, estas redes estaban principalmente dedicadas a abogar por un núcleo de derechos políticos y civiles de raíz liberal conocidos como "derechos de primera generación". La legislación internacional de derechos humanos ya incluía la idea de "segunda y tercera generación" (derechos económicos, sociales, culturales y grupales), pero aún no eran el objeto de una extendida actividad transnacional.<sup>81</sup> Aunque el hecho de centrarse únicamente en la "primera generación" se transformó luego en un motivo de controversia y muchos empezaron a exigir una agenda más amplia, no pareció impedir en esos años el trabajo conjunto para detener las violaciones en el Cono Sur. Exiliados latinoamericanos,

abogados europeos y congresistas estadounidenses evitaron la discusión abierta de las consecuencias últimas de su cooperación, aún cuando era claro que diferían en el modo de entender los vínculos entre derechos humanos, democracia liberal y capitalismo. Sus agendas de largo plazo eran notoriamente diferentes, pero ninguno de ellos lo planteó como un obstáculo insuperable para su colaboración en lo inmediato.

En el caso de los militantes uruguayos, sus objetivos finales seguían siendo derrocar a la dictadura y promover algún tipo de cambio social en su país. Utilizaban el lenguaje de derechos humanos a nivel internacional para denunciar violaciones graves y reclamar el retorno de la democracia, pero nunca expresaron su agenda de largo plazo en términos de derechos, de la generación que fueran. Para ellos, siempre estuvo claro que el lenguaje de los derechos humanos era básicamente una forma de condenar los aspectos más acuciantes de la represión ante públicos amplios. Pero cierta controversia sobre la importancia de sus denuncias en la lucha contra la dictadura se hizo evidente más de una vez. ¿Cómo percibían los exiliados la tensión entre sus reclamos de derechos humanos y sus objetivos revolucionarios de largo plazo? ¿Trataron de conciliar las dos agendas? El proceso que llevó a los grupos y partidos más importantes de la izquierda uruguaya a coincidir en el reclamo de "amnistía" a fines de los setenta es un buen punto de partida para contestar estas preguntas.

La idea había sido propuesta en Uruguay antes del golpe de Estado de 1973 en un intento de evitar una mayor polarización. Como se expresaba en el programa fundacional del Frente Amplio:

La amnistía se usará como instrumento que, conjuntamente con la supresión de las formas de violencia que encarna el régimen vigente, permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad, a efectos de facilitar el desarrollo normal de la vida política y social del país. Para la obtención de tal objetivo, comprenderá a aquellas personas incursoas en delitos políticos o conexos con ellos, cometidos con la finalidad de modificar las actuales bases políticas, económicas y sociales.<sup>82</sup>

Sin entrar en detalles, muchos dentro de la izquierda legal habían propuesto algún tipo de amnistía e incluso una suerte de mutuo perdón como pasos necesarios para abrir las negociaciones entre los partidos, los militares y los grupos guerrilleros. Según la forma tradicional de entender este concepto, nacida en las guerras civiles de fines del siglo XIX y principios del XX, la intención era cerrar heridas dolorosas resultantes de confrontaciones políticas recientes y dejar atrás las acusaciones recíprocas por parte de los excontendientes.<sup>83</sup> A principios de los setenta, la participación de escuadrones paramilitares y la brutalidad creciente de la represión contra los guerrilleros y otros grupos de protesta llevaron a que muchos dudaran de la pertinencia de esa solución tradicional. En la época del golpe ya pocos pensaban que era una medida adecuada. Mientras la represión seguía empeorando, los grupos y partidos de izquierda continuaron exigiendo la liberación de los “presos políticos” pero dejaron de insistir en la palabra amnistía para evitar sugerir cualquier posibilidad de perdón recíproco. Cuando algunos exiliados involucrados en actividades de derechos humanos comenzaron a utilizar nuevamente el término a fines de los setenta, se vieron en la necesidad de explicar qué querían decir.

La creación de la *Secretariat International de Juristes pour l'Amnistie en Uruguay* (Secretaría Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, SIJAU) en París en 1977 fue de gran importancia a este respecto. Edgardo Carvalho y María Elena Martínez, dos abogados uruguayos exiliados, reunieron a un grupo de juristas de diferentes países para “promover la amnistía y el respeto por los derechos humanos en Uruguay”. En Europa, este lenguaje estaba a tono con los esfuerzos contemporáneos por parte de sectores de la izquierda, principalmente intelectuales, de disociarse de las conocidas experiencias de represión en la Unión Soviética. El “descubrimiento” del “totalitarismo soviético” fue de particular importancia en Francia y llevó a un nuevo interés en el lenguaje y activismo de derechos humanos.<sup>84</sup> También se lanzaron campañas por amnistía en Uruguay en otros países europeos. Algunos de los participantes ya estaban familiarizados con la situación uruguaya porque habían viajado al país en

misiones de derechos humanos y tenían estrechos vínculos con los exiliados. Entre los miembros fundadores de SIJAU, los juristas franceses Jean-Louis Weil y Louis Joinet habían visitado Buenos Aires y Montevideo en 1975 en representación del Movimiento Internacional de Juristas Católicos. En esa ocasión, habían colaborado en la liberación de Hugo Cores y desde entonces mantenían relaciones con el PVP, uno de los principales sostenes de SIJAU. Dos años después, ya como miembro de la Secretaría, Weil hizo otra visita a Uruguay, esta vez con el abogado estadounidense Robert Goldman (redactor del informe de la OEA) y el senador español Joaquín Martínez-Bjorkman.<sup>85</sup>

SIJAU ayudó a que los exiliados uruguayos aprovecharan la experiencia de estos abogados en legislación internacional de derechos humanos. Los comités locales, los grupos de solidaridad y los familiares de presos y desaparecidos se vincularon con la Secretaría para potenciar sus esfuerzos de denuncia. En octubre de 1978, SIJAU apoyó la formación de la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), que reunió exiliados de varios grupos y partidos. A diferencia de los anteriores Comités de Defensa de los Prisioneros Políticos de Uruguay, AFUDE no fundaba su accionar en la afinidad ideológica y política, sino que buscaba “informar a la opinión pública internacional de la gravedad de las prácticas sistemáticas del gobierno uruguayo para hacer ‘desaparecer’ a sus ciudadanos y obtener información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.”<sup>86</sup> Inspirada en grupos similares de otros países latinoamericanos, AFUDE preparó informes detallados para la ONU y la OEA, mientras sus miembros, principalmente Tota Quinteros, recorrían el mundo reuniéndose con funcionarios internacionales y diplomáticos extranjeros para denunciar la desaparición de sus familiares. A diferencia de Madres de Plaza de Mayo de Argentina y otros grupos que actuaban en sus propios países, AFUDE fue fundada en París y no tuvo una presencia relevante dentro de Uruguay. De hecho, la importancia de AFUDE y SIJAU a fines de los setenta se incrementó porque no había grupos de ese tipo en Uruguay, con la salvedad de algunos familiares de desaparecidos en Argentina que

trabajaban desde 1977 pero no tenían demasiados vínculos con las redes transnacionales de derechos humanos.<sup>87</sup>

SIJAU hizo otro esfuerzo importante para enmarcar la lucha contra la dictadura uruguaya en el lenguaje y los métodos del activismo transnacional de derechos humanos. En diciembre de 1978, en el trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, organizó un “Coloquio sobre el estado de excepción y los derechos humanos en Uruguay” en el Senado francés. El evento no sólo atrajo la atención de los medios europeos con la participación de prominentes abogados (Goldman, Weil y Joinet) y políticos franceses de renombre (senadores Bernard Parmantier, socialista, y Alain Poher, demócrata-cristiano), sino que también reunió a muchos líderes de la izquierda uruguaya. Además de participar en la reunión, E. Rodríguez (PCU), Vilaró (GAU), Díaz (PS), Prieto (PVP) y Erro (PG) ofrecieron una conferencia de prensa conjunta y aprobaron un pedido común de amnistía.<sup>88</sup> El principal logro del coloquio fue aclarar el significado de este pedido: liberación de todos los presos políticos, aparición de los desaparecidos, levantamiento de la suspensión de los derechos sindicales y políticos, revocación de los despidos por razones políticas, retorno de los exiliados, anulación de las disposiciones legales del período autoritario y reestablecimiento de los derechos y las libertades democráticas. Aunque aún quedaban muchos temas abiertos al debate, este listado se hizo frecuente en los materiales publicados por exiliados.

Con su reclamo de liberar a “todos los presos políticos”, SIJAU señalaba un motivo frecuente de tensión entre los izquierdistas uruguayos. En años anteriores, el tema se había planteado varias veces pero los grupos y partidos de izquierda no lo habían discutido abiertamente. Al enfrentar los requisitos específicos de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, los exiliados habían logrado ponerse de acuerdo casi siempre. La lucha contra la tortura, por ejemplo, les permitió sortear la estricta definición de AI de “prisionero de conciencia”. Otro ejemplo fue la respuesta de los exiliados al gobierno holandés cuando se negó a otorgar visas a algunos tupamaros presos con el argumento de que no eran “presos

políticos”: “los compañeros que están detenidos en los campos de concentración de la dictadura [...]son *todos presos políticos*”.<sup>89</sup> Pero las discrepancias internas eran claras en los nombres que elegían y en la sutil redacción de sus eslóganes.<sup>90</sup>

Con cientos de sus miembros en prisión, el PCU generalmente pedía “libertad para los presos políticos” y enumeraba a los comunistas encarcelados y también a Seregni como símbolo de su lealtad al FA. Otros en la izquierda enfatizaban el reclamo de “libertad para TODOS los presos políticos” para expresar su discrepancia con la percepción más legalista de los comunistas. Con esta palabra extra se pretendía incluir a los presos que habían estado involucrados en acciones violentas o habían caído antes del golpe de Estado. Sin embargo, la selectividad no era exclusiva de los comunistas. Muchos ex tupamaros, por ejemplo, centraron sus esfuerzos de denuncia en Raúl Sendic, mantenido como “rehén” por el régimen, supuestamente para prevenir acciones por parte del MLN-T. Duramente reprimido en Argentina, el PVP estaba especialmente preocupado por los uruguayos desaparecidos en ese país. Dadas estas diversas experiencias y modos de entender la represión, surgían tensiones cada vez que los exiliados trataban de hacer una selección consensual de nombres. Aunque SIJAU no pudo borrar las profundas diferencias existentes sobre medios y fines de la militancia de izquierda, su propuesta marcó un primer paso hacia una fórmula común que incluía a “todos los presos políticos” en un llamado no partidario y anclado en fundamentos legales. De hecho, la mayoría de los grupos y partidos terminó apoyándolo.<sup>91</sup>

La propuesta de amnistía también enfrentaba la delicada pregunta de qué pasaría con los militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Erro, por ejemplo, se mostró inicialmente reacio a respaldarla porque podría dar a entender un perdón tácito para los responsables de esas violaciones. El PVP, fuerte partidario de SIJAU, excluyó tal posibilidad y abogó por justicia (“juicio y castigo”, en sus propias palabras).<sup>92</sup> En Europa, el debate se profundizó con la llegada de militares que confesaron sus crímenes y lograron irse de Uruguay con estatus de refugiados otorgado por diferentes gobiernos.



En 1978, el Teniente Julio César Cooper llegó a Suecia donde acusó a los militares uruguayos de torturar prisioneros y dijo haber sido castigado por negarse a participar. AI y SIJAU lo entrevistaron y recibieron su testimonio como prueba irrefutable de la existencia de violaciones de derechos humanos en Uruguay.<sup>93</sup> Algunos exiliados confirmaron y divulgaron su declaración, pero otros dudaron de su palabra, afirmaron que no debería darse asilo a represores y dijeron que los exiliados no podían perdonar a quienes no habían sido juzgados adecuadamente.<sup>94</sup> Este debate anticipó la discusión de lo que los académicos que estudian “procesos de democratización” llaman “justicia transicional”: cómo manejar las “exigencias de un reconocimiento oficial de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por los regímenes militares salientes y del castigo a los culpables de cometer y ordenar esas violaciones.”<sup>95</sup> Las discrepancias sobre Cooper y otros “arrepentidos” fueron tempranas expresiones de lo que posteriormente serían estrategias definidas para lidiar con las herencias represivas, legales y políticas del período autoritario, incluido el papel de las Fuerzas Armadas y el equilibrio entre justicia y “verdad”.

En este incipiente debate estaba en juego el significado mismo del activismo de derechos humanos en la militancia de izquierda. La cuestión no era si valía la pena denunciar las violaciones (una pregunta que la mayoría de los exiliados respondía afirmativamente), sino si era suficiente y cómo se relacionaba con otras posiciones políticas. Muchas veces los exiliados trataron este tema refiriendo a las “tradiciones nacionales” y haciendo “apelaciones emocionales”. Al presentarse ante organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, solían referirse al apoyo que su país había prestado a la legislación internacional de derechos humanos, en especial su participación en la elaboración de la carta orgánica de la ONU en 1945.<sup>96</sup> Esta operación era similar a la forma en que Michelini había recurrido a la idea de Uruguay como “Suiza de América”, un país en el que las libertades y el progreso social habían avanzado en el siglo XX y donde el autoritarismo significaba una violación a décadas de paz y democracia. Mientras Michelini había apuntado principalmente a la

atención internacional, la repetición de esta idea a fines de los setenta sugiere que también era efectiva para explicar la defensa de los derechos humanos dentro de los grupos de exiliados. Con la referencia a las “tradiciones nacionales” se buscaba salvar la distancia entre el activismo de derechos humanos y la militancia de izquierda, como si el ser izquierdista “a la uruguaya” implicara de algún modo esta relación.

Otra razón generalizada para que los exiliados trabajaran por los derechos humanos era el sentimiento de que había poco más que pudieran hacer para ayudar a sus compañeros presos y sobrellevar la pérdida de familiares y amigos asesinados y desaparecidos. Cuando Moriana Hernández escribió por primera vez en nombre de sus familiares presos a la Comisión Internacional de Juristas, explicó que “estando yo asilada en México no puedo hacer otra cosa que dirigirme a quienes puedan [...] salvar a mi madre, como a tantos otros compatriotas uruguayos de la tortura y [...] lograr su pronta liberación.”<sup>97</sup> Muchos análisis del activismo de derechos humanos enfatizan esta “apelación emocional” para explicar la fuerte participación de mujeres. Señalan que las mujeres entraron en la actividad política porque eran las únicas libres y con vida para luchar por sus maridos, hijos y padres desaparecidos, asesinados o torturados. Al destacar la novedad de su compromiso político, estos análisis señalan que la protección del bienestar de sus familias era una tarea femenina tradicional.<sup>98</sup> También en el caso uruguayo las mujeres tuvieron un papel principal en las denuncias ante organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. Pero muchas (como Hernández) ya eran militantes de izquierda. Para ellas, la novedad mayor del activismo transnacional fue seguramente el encuentro con activistas europeas y estadounidenses que planteaban al género como un asunto político. Más allá de estas consideraciones, es claro que el peso de los lazos familiares y los motivos emocionales fueron importantes también para que muchos hombres se involucraran en el trabajo de derechos humanos.

Sólo unos pocos grupos de izquierda ofrecieron fundamentos más acabados de su defensa de los derechos humanos. En la mayoría

de estas explicaciones, éstos estaban subordinados a las estrategias del cambio en Uruguay. El PCU, por ejemplo, enmarcaba los derechos humanos en su concepción global de la política y el cambio social como si se tratara de una operación no problemática. Decían que la represión por parte del "Estado fascista" pretendía frenar "la expresión y organización de las masas populares" contra la "oligarquía antinacional". Las denuncias de derechos humanos eran fundamentales para la "causa popular" porque facilitaban una "alianza antifascista" con los "sectores democráticos de la burguesía nacional", el primer paso hacia una "democracia avanzada" en el "camino al socialismo en Uruguay".<sup>99</sup> Para evitar alienar a las Fuerzas Armadas en ese proceso, el PCU no decía qué sucedería luego del fin de la dictadura ni qué pasaría con los culpables de las violaciones a los derechos humanos. Esto explica por qué los comunistas participaban de los esfuerzos de denuncia pero no emitían su opinión sobre el tema de la "justicia transicional". Esta postura reflejaba un rasgo tradicional de los dirigentes del PCU, que eran hábiles en la sintonía fina de la política y adversos a las declaraciones radicales abstractas. Un pragmatismo similar les permitió combinar la lealtad a la Unión Soviética y el activismo de derechos humanos, aunque sabían que muchos de sus nuevos socios condenaban abiertamente la situación de derechos humanos en ese país.<sup>100</sup> Al reconocer que la mayoría de sus vínculos internacionales no se originaban en redes de derechos humanos sino en países socialistas, los comunistas uruguayos presentaron la "resistencia de la opinión pública internacional" contra el régimen uruguayo como una continuación del antifascismo de la Segunda Guerra Mundial representado por la Unión Soviética.<sup>101</sup>

A diferencia del PCU, el PVP intentó un replanteo explícito de su doctrina y práctica política en relación con su nuevo compromiso con los derechos humanos. Esto reflejaba la relativa juventud y escaso tamaño del grupo que hacían más fáciles la deliberación y el cambio doctrinario. De todos modos, este grupo coincidía con el PCU al considerar la defensa de los derechos humanos como parte de sus planes de cambio radical en Uruguay. Relacionaba los métodos represivos con los intereses de clase y acusaba al régimen de "aniquilar [...]

a las organizaciones políticas obreras y populares y los restos del nacionalismo burgués".<sup>102</sup> Sostenía que "Nuestra participación en el debate internacional en torno a los derechos humanos está totalmente subordinada [...] a la práctica concreta de la lucha de clases en nuestro país."<sup>103</sup> Los esfuerzos por entender lo que les había ocurrido en Buenos Aires, sin embargo, los llevaron a caracterizar al régimen como un "nuevo tipo" de autoritarismo por sus métodos "terroristas" e innovaciones legales. Por lo tanto, el PVP entendió que su compromiso con los derechos humanos incluía "barrer con toda la legislación y la práctica represiva que hoy ahoga a nuestro pueblo" y también ayudar a "que los acusados de hoy se transformen en acusadores de mañana". Junto con la experiencia de la represión y los estrechos vínculos con juristas europeos progresistas, sus orígenes anarquistas ayudan a explicar su defensa de los derechos individuales contra el "terrorismo de Estado". Apoyaron firmemente a SIJAU, participaron en AFUDE y defendieron la propuesta de amnistía. A la vez, pensaban que "la tarea de rearme del movimiento popular y de acumulación de fuerzas antidictatoriales y revolucionarias, sólo puede realizarse dentro del país", con muchos militantes instalándose Brasil en 1978 para ayudar a reorganizar la resistencia "en las fábricas, las oficinas, los centros de enseñanza, los barrios y también en las cárceles y los campos de concentración".<sup>104</sup> La represión de este movimiento los llevó a aumentar el compromiso con las tareas de denuncia.<sup>105</sup>

Todos estos intentos de explicar el activismo de derechos humanos no pudieron esconder hasta qué punto difería de las formas tradicionales en que la izquierda había entendido el internacionalismo, que se fundaba en la afinidad ideológica y apuntaba a las comunidades como receptoras de solidaridad. Aunque la crítica no siempre era explícita, los exiliados a veces desaprobaban el énfasis en los individuos como portadores de derechos y beneficiarios del apoyo que definía el trabajo de derechos humanos.<sup>106</sup> Otro reproche común era declarado más abiertamente y expresaba el deseo de los exiliados de ir "más allá de los derechos humanos" al exponer la identidad política de las "víctimas" y exaltar su voluntad de luchar y morir por sus convicciones. Más cercana al lenguaje heroico de la izquierda

anterior al golpe que al fundamento "humanitario" de posteriores denuncias, esta operación rompía claramente con el reclamo de que las convicciones de las víctimas carecían totalmente de importancia cuando ocurría una violación de derechos internacionalmente protegidos, un rasgo principal del lenguaje de derechos humanos.<sup>107</sup> Para los exiliados, sin embargo, tenía la ventaja de hacer evidente el conflicto social que daba significado a su militancia: las "víctimas" eran, como ellos, los que se habían opuesto a los diseños económicos y políticos de la "oligarquía y el imperio" antes y después del golpe de Estado de 1973. Ésta es la razón por la que sus publicaciones estaban repletas de elogios a los "mártires" y "héroes" que habían sacrificado sus vidas para producir el cambio social en Uruguay.<sup>108</sup>

Además de esta explicitación de las conexiones entre la represión y las explicaciones estructurales del autoritarismo, la apropiación del lenguaje de derechos humanos por parte de los exiliados tuvo también otras cargas ideológicas. *Cuadernos de Marcha* fue la única publicación uruguaya que registró un debate importante sobre los diferentes usos de este lenguaje en la militancia del exilio. En 1978, el conocido crítico literario Ángel Rama, radicado en Venezuela desde 1973, escribió un artículo sobre el impacto del exilio en los escritores latinoamericanos centrado en las dictaduras de derecha instaladas en los setenta. No mencionaba el caso cubano.<sup>109</sup> Reimpreso más de una vez, el artículo fue extensamente leído por los intelectuales latinoamericanos. En 1980, finalmente, Octavio Armand, un poeta cubano exiliado, protestó por la indiferencia ante el caso cubano en éste y en otros artículos de Rama, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Rama respondió en *Cuadernos de Marcha* en agosto de 1980. Admitió que existían coincidencias entre quienes habían salido de Cuba desde fines de los sesenta ("partidarios de una democracia liberal burguesa, antiautoritaria y antisocialista") y los "vastos grupos liberales que los militares [sudamericanos] arrasaron una vez que destruyeron los sectores insurreccionales". También observó que muchos exiliados izquierdistas habían adoptado un enfoque político que enaltecía los derechos humanos y la democracia. Muchos exiliados cubanos y sudamericanos, concluía, podían por lo

tanto estar de acuerdo en defender una "justicia civil independiente, [...] derechos sindicales, [...] el libre juego de los partidos políticos y [...] los derechos humanos". Sin embargo, advertía que había que "reconstruir el campo de fuerzas en América Latina [...] [e] impedir que se lo reduzca a la simplista dicotomía 'democracia-autoritarismo' al parecer inspirada por la concepción reductivista de los derechos humanos que ha puesto en circulación la administración Carter en Estados Unidos."<sup>110</sup>

De acuerdo con las fuentes disponibles, los izquierdistas uruguayos no se acercaron a los exiliados cubanos ni respaldaron esa "simplista dicotomía". A pesar de algo de amargura expresado por algunos grupos radicales en cuanto al giro prosoviético de la dirigencia cubana, la mayoría de los exiliados uruguayos mantuvo la imagen de la isla como fuente de la esperanza revolucionaria de América Latina.<sup>111</sup> Las cosas pueden haber sido más complicadas, sin embargo, ya que el propio Rama tenía opiniones muy duras sobre la naturaleza represiva del régimen cubano y se situaba del lado de muchos de los escritores prohibidos y expulsados. Pero esto era en sus relaciones más estrechas y en su diario personal, que contrastaban con sus opiniones públicas mucho más convencionalmente izquierdistas.<sup>112</sup> Hasta ese momento, los exiliados uruguayos no utilizaron el lenguaje de derechos humanos para describir la situación en Cuba sino más bien como una herramienta política persuasiva para luchar contra el régimen autoritario de derecha en su país. Algo similar se daba en cuanto a la Unión Soviética, aunque la discrepancia era más explícita en este caso, con el PCU y un pequeño grupo de ex tupamaros como únicos defensores abiertos.

La mayoría de los exiliados sabía que el éxito de sus denuncias dependía de lograr mantener sus reclamos radicales de cambio social separados del activismo por los derechos humanos. En un sentido análogo, sus "héroes" de la lucha de clases y la revolución aparecían como meras "víctimas" de la represión en los expedientes preparados para el gobierno estadounidense, la ONU y la OEA. Un claro ejemplo de esta postura se encuentra en la carta que M. Isabel Delfino de Cultelli envió a Patricia Derian para negar que su marido fuera un "terrorista tupamaro" y afirmar que "muchos hombres de buena

voluntad que podrían ayudar a salvar [su] [...] vida están siendo engañados sobre [su] [...] verdadera postura política".<sup>113</sup> De un modo similar, los lazos de solidaridad con los partidos de izquierda y comités de solidaridad locales eran con frecuencia útiles para los esfuerzos de derechos humanos, pero los exiliados distinguían los dos ámbitos como fuentes distintas de apoyo para sus actividades y sabían cómo apelar a cada uno según sus necesidades específicas en un momento determinado. Esta conciencia significaba un claro quiebre con el lenguaje "heroico" de los sesenta y los ayudaba a orientarse en los meandros del activismo de derechos humanos, al que al principio adhirieron no como una alternativa sino como un complemento para otras acciones dirigidas a derrotar a la dictadura y promover el cambio social en Uruguay.

Muchos exiliados uruguayos empezaron a usar el lenguaje y los métodos del activismo transnacional para denunciar lo que estaba sucediendo en el Río de la Plata ante la necesidad de buscar refugio en organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. Sus actividades tenían un importante antecedente en los primeros esfuerzos de Michelini. Al adherir a un tipo de activismo que no tenía precedentes entre los izquierdistas uruguayos, Michelini se había apartado de las disputas internas y se había centrado en hacer conocer el caso uruguayo en las redes de derechos humanos. Luego de su muerte, sin embargo, no hubo un solo dirigente importante que estuviera tan comprometido con un planteo de este tipo. Más que como un ejemplo político, Michelini fue recordado como un compañero caído, uno de los más importantes. Cada 20 de mayo, los exiliados de todos los partidos y grupos se juntaban en diferentes ciudades para conmemorar los aniversarios de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Los promotores de esas reuniones pensaban que eran buenas oportunidades para la "movilización común", principalmente porque los legisladores asesinados representaban un amplio espectro político. Además, habían sido políticos respetables cuyas muertes probaron que la dictadura uruguaya había violado toda definición posible de "seguridad nacional" y por lo tanto atraían la atención de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales. A tono con este énfasis

no partidario, las ceremonias conmemorativas con frecuencia incluían servicios religiosos y presentaban a los dos legisladores asesinados como "víctimas de la dictadura" o "mártires de la democracia".<sup>114</sup> Juan Raúl Ferreira ofreció otra razón para recordar sus asesinatos: "sus memorias [...] [atraen a los uruguayos] más allá de partidos y divisas, sin necesidad de concretar ningún tipo de entendimiento o acuerdo político."<sup>115</sup> Esto fue exactamente lo que sucedió. En 1980, cuando la CDU invocó a los dos legisladores junto con Seregni, Ferreira Aldunate y el histórico dirigente colorado, estaba haciendo un llamado simbólico más que enraizando una fuerza política en las opiniones de estos líderes.

La militancia del exilio implicó una revisión de las posiciones tomadas en el pasado, una reconsideración de las diferencias entre el activismo de derechos humanos y la solidaridad internacional y una evaluación del papel de estas actividades en relación a otras acciones políticas. La mayoría de los grupos y partidos de izquierda estaba más interesada en debatir tácticas y estrategias para el cambio en Uruguay que en el activismo transnacional en sí mismo, que generalmente era concebido como un medio para un fin. Se hicieron pocos esfuerzos para integrar los dos aspectos. Con excepción de los intentos de unir fuerzas en apoyo de la plataforma de amnistía propuesta por SIJAU, los exiliados siempre separaron su compromiso político entre denuncia transnacional y militancia partidaria nacional. Al separar los derechos humanos del resto de su actividad política, podían hablar de "víctimas" y minimizar selectivamente las cuestiones ideológicas en los expedientes que preparaban para organizaciones internacionales a la vez que exaltaban a los "mártires" y "héroes" que habían consagrado sus vidas a la revolución. Su habilidad para cambiar de lenguaje político explica su exitosa participación en actividades de derechos humanos en una época en que la comunidad internacional era particularmente receptiva a esos reclamos. El énfasis en la política nacional, en la que no lograban ponerse de acuerdo, explica por qué su trabajo conjunto en la arena internacional no pudo asegurar la unidad política de todos los grupos de oposición.

## Capítulo Cuatro

# Los derechos humanos en la transición, 1981-84

La transición uruguaya a la democracia comenzó con el fracaso del régimen en su intento de imponer una Constitución autoritaria en el plebiscito de 1980 y terminó con las elecciones nacionales de noviembre de 1984 y el triunfo del Partido Colorado y su principal líder Julio María Sanguinetti. Este capítulo analiza las posiciones de los exiliados durante esos años, los últimos de su destierro. Aunque el gobierno mantuvo las medidas represivas y siguió censurando los debates públicos, la derrota lo forzó a negociar y permitir cierta ampliación de la participación política, lo que significó una “apertura inesperada” para la oposición. Desde el punto de vista de los exiliados, el gran cambio fue que la iniciativa política se trasladó nuevamente a Uruguay. En años anteriores, los acontecimientos más importantes de la actividad de la izquierda, como el “acuerdo de México”, la fundación del FAE y de la CDU y una gran variedad de acciones de derechos humanos, habían ocurrido en el exterior. Después de 1980, las principales novedades tuvieron lugar dentro del país. Los exiliados siguieron organizando actos y actividades de presión, pero su principal preocupación pasó a ser apoyar las crecientes fuerzas de la oposición en Uruguay.

El análisis de las posiciones de la izquierda política en este período debe detenerse en las “demandas de reconocimiento oficial de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los regímenes militares salientes y de castigo a los culpables de cometer

y ordenar esas violaciones".<sup>1</sup> En los últimos años de la dictadura, un amplio espectro de nuevos movimientos sociales que actuaban dentro de Uruguay situó estas preocupaciones en el centro de su accionar, mientras que los partidos políticos, incluidos muchos dentro de la izquierda, tendían a considerarlas obstáculos en las negociaciones con las autoridades. Como se explicó en capítulos anteriores, los exiliados habían sido pioneros entre los izquierdistas uruguayos en ocuparse de esos temas. Este capítulo considera su impacto en la discusión que se abrió a partir de 1980 sobre las herencias represivas, legales y políticas del período autoritario.

#### UNA APERTURA POLÍTICA INESPERADA

Luego del plebiscito de 1980, se abrieron más de tres años y medio de negociaciones entre militares y políticos sobre los términos de la transición hacia un régimen civil democrático en Uruguay.<sup>2</sup> Los partidos comenzaron a recuperar su tradicional preponderancia en la escena pública nacional. Aunque el régimen cívico-militar había intentado una reformulación radical de las relaciones entre Estado, gobierno, sistema político y sociedad civil, no pudo evitar que la transición se encauzara por canales políticos tradicionales. Las Fuerzas Armadas habían tratado de legitimar su poder en una crítica sistemática de los procedimientos democráticos previos al golpe, pero también buscaron una validación popular para su gobierno, aceptaron su derrota en el plebiscito y finalmente reconocieron a los partidos como interlocutores válidos. Los partidos, por su parte, habían logrado mantener un moderado nivel de actividad y estaban listos para aprovechar la nueva situación política. El auge de periódicos y revistas políticas de la primera mitad de los ochenta mostró que sus líderes y militantes estaban listos para reclamar la escena pública.

En julio de 1981, comenzaron las negociaciones entre las autoridades militares y representantes de los partidos tradicionales con el objetivo de trazar un nuevo cronograma para la gradual democratización del país.<sup>3</sup> Los comandantes militares dieron a conocer una

propuesta que incluía nuevas disposiciones para la organización de los partidos, el levantamiento de las proscipciones de algunos políticos y la realización de elecciones nacionales y un nuevo plebiscito constitucional en noviembre de 1984. Las negociaciones estuvieron plagadas de dificultades y reveses, fundamentalmente porque el gobierno seguía reprimiendo a la oposición, aunque se tomaron algunas medidas para abrir la participación política.<sup>4</sup> La designación del General Gregorio Álvarez, primer presidente militar del régimen, en setiembre de 1981 y la divulgación de estrictas normas para la reorganización partidaria en junio de 1982 demostraron que las Fuerzas Armadas no entregarían el poder fácilmente pero también que los partidos iban a reconquistar su espacio.

La posición del régimen uruguayo contrastaba con la situación en Argentina, donde la derrota ante Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas precipitó la desintegración del gobierno autoritario en 1982 y desencadenó una rápida transición al poder civil en 1983. Al mismo tiempo, las autoridades uruguayas estaban en una posición más débil que sus pares chilenos. En Chile, un plebiscito popular en 1980 había dado a Pinochet ocho años más en el poder y el control sobre la futura transición a la democracia. No fue sino hasta más avanzados los ochenta, cuando el país sufrió una profunda recesión económica, que la oposición se organizó y forzó la apertura de un espacio político. Sin embargo, la restauración de la democracia tomó casi una década, siempre bajo la tutela de Pinochet y las Fuerzas Armadas. El caso uruguayo estaba a mitad de camino entre la súbita caída de los militares argentinos y la estricta vigilancia que el régimen chileno mantuvo sobre todo el proceso de transición. En Uruguay, las Fuerzas Armadas lograron controlar la transición pero su poder estuvo siempre limitado por el creciente papel de la oposición. Este equilibrio de poderes fue una consideración importante en las decisiones estratégicas de los diferentes actores involucrados en todo el proceso.

Las elecciones internas de noviembre de 1982 para designar las direcciones de los partidos tradicionales mostraron claramente esta característica de la transición uruguaya: mientras las autoridades planeaban las elecciones como una oportunidad para "regenerar" la

vida política, las fuerzas opositoras las transformaron en otro plebiscito contra el régimen. Los grupos y partidos de izquierda, aún ilegales y por lo tanto impedidos de participar, debieron buscar la forma de demostrar que aún tenían apoyo popular. Esto implicó largas discusiones internas y reveló una importante división entre aquellos que eran partidarios de una expresión electoral autónoma y quienes pensaban que debían apoyar a los sectores más opositores dentro de los partidos legales. Los líderes y militantes exiliados y clandestinos sostuvieron apasionados debates sobre este tema. En junio y julio de 1982, Seregni logró divulgar una serie de cartas desde la cárcel en las que establecía su posición favorable a afirmar la presencia del FA mediante la emisión de votos en blanco.<sup>5</sup> Junto a otros líderes del FA que vivían en Uruguay, Seregni temía que la identificación de sus seguidores con el grupo de Wilson Ferreira Aldunate pusiera en peligro el futuro de la coalición. El temor era entendible ya que el FA tenía a varios de sus líderes presos, operaba dificultosamente en la clandestinidad (entre 1976 y 1982 no se reunió el plenario) y estaba surcado de diferencias internas.<sup>6</sup> El moderado Partido Demócrata Cristiano, que había abandonado la coalición en 1973 y recién se reintegró a fines de 1983, se unió a la dirigencia del FA en la promoción del voto en blanco. Muchos seguidores de Michelini, que no habían tenido demasiada actividad durante el período autoritario, expresaron la misma opinión.<sup>7</sup>

Según los periódicos y boletines informativos publicados por los exiliados uruguayos, en la segunda mitad de 1982 muchos de los grupos y partidos de izquierda que actuaban fuera del país aún no habían decidido qué hacer. En vez de manifestarse sobre las opciones de voto, seguían insistiendo en la necesidad de transformar las internas en un plebiscito contra la dictadura.<sup>8</sup> Las cartas de Seregni no fueron muy difundidas en el exilio. Los responsables fueron los dirigentes y partidarios del FAE que las recibieron primero y ocultaron su existencia o al menos demoraron su divulgación porque eran contrarios al voto en blanco.<sup>9</sup> Los líderes del PCU, el PS y otros grupos que participaban en la CDU sugirieron inicialmente que los frenteamplistas debían votar por la facción de Ferreira Aldunate a

cambio de que éste apoyara la legalización de la izquierda. En abril de 1982, en una carta abierta a “nuestros amigos blancos y colorados”, el Secretario General del PCU explicó que el Frente Amplio aún no había tomado una decisión formal, sostuvo la necesidad de escuchar la opinión de los exiliados e hizo un llamado a la “convergencia” de todas las fuerzas de oposición.<sup>10</sup>

Por el contrario, Erro, el PVP y otros pequeños grupos radicales se manifestaron por la abstención electoral y el voto en blanco desde el comienzo de la discusión. Aunque varios no eran integrantes del FA en ese momento, respaldaron la posición de Seregni para enfatizar su distancia de los partidos tradicionales.<sup>11</sup> La mayoría de la izquierda apoyó la estrategia de Seregni y resintió la conducta de los dirigentes exiliados del PCU, el PS y el FAE, quienes finalmente decidieron promover el voto en blanco. Además, el PCU y el PS debieron resolver desavenencias internas, ya que muchos comunistas que actuaban en la clandestinidad y también José Pedro Cardoso, el principal líder socialista en Montevideo, estaban de acuerdo con Seregni.<sup>12</sup> Estas diferencias tácticas y decisiones tardías explican por qué algunos partidarios de la izquierda terminaron votando en blanco mientras otros consideraron más útil respaldar a los sectores contrarios al régimen dentro de los partidos tradicionales. Por primera vez desde el golpe de Estado, las elecciones internas confrontaron a la dirigencia de izquierda, dentro y fuera de Uruguay, con el desafío de reconquistar un espacio en la política nacional sin agudizar la rivalidad y suspicacia entre los diversos sectores.

En términos generales, las elecciones significaron otro revés para el gobierno: las facciones de los partidos Colorado y Nacional contrarias al régimen obtuvieron el 70% y el 80% de la votación interna respectivamente. El voto en blanco representó el 7%, mientras que el grupo de Ferreira Aldunate obtuvo el 49% de todos los votos emitidos. Además de expresar una insatisfacción general con la dictadura, las internas revelaron la existencia de estrategias partidarias antagónicas y demostraron que los grupos de oposición no sólo luchaban contra el régimen autoritario sino que también competían entre sí en la arena democrática que iban reconquistando. Alarmados

ante la perspectiva de un poderoso Partido Nacional inflado por la izquierda, los colorados combatieron la posibilidad de una alianza entre los blancos y el Frente Amplio. El líder colorado Sanguinetti reclamó la legalización de los sectores moderados del FA con la idea de que la coalición recuperara una vida política autónoma. Los blancos más radicales, en particular Ferreira Aldunate, interpretaron los resultados como una prueba del apoyo popular a su estrategia y vieron sus votos como indicadores de un probable éxito en las futuras elecciones nacionales.<sup>13</sup> Desde la izquierda, las evaluaciones eran más complicadas: aunque el 7% expresó el poder de convocatoria que mantenían el FA y sus dirigentes, sólo una pequeña parte de quienes habían votado a la coalición en 1971 emitieron votos en blanco en 1982.<sup>14</sup>

Para las Fuerzas Armadas, los resultados fueron menos ambivalentes: en vista de la predominancia de los sectores opositores, decidieron iniciar consultas formales con los partidos tradicionales en abril de 1983. Sin embargo, volvieron a presentar una propuesta que dejaba intactas las estructuras del régimen autoritario.<sup>15</sup> Luego de muchas discusiones y discrepancias internas, los partidos se negaron a aceptar la propuesta, argumentando con razón que la población ya la había rechazado dos veces: en el plebiscito de 1980 y en las elecciones internas de 1982.<sup>16</sup> En junio de 1983, las negociaciones llegaron a un callejón sin salida y se suspendieron las conversaciones entre los partidos y los representantes militares. Entre mediados de 1983 y el reestablecimiento de contactos formales en junio de 1984, la oposición creció constantemente tanto en tamaño como en niveles de movilización, forzando al gobierno a reconsiderar su estrategia.

Se ha dicho muchas veces que las razones económicas no fueron decisivas en la derrota de los planes autoritarios en el plebiscito y en las internas, pero es claro que la fuerte crisis económica de la segunda mitad de 1982 tuvo como resultado la hostilidad de algunos sectores poderosos y profundizó la necesidad de algún tipo de apertura y discusiones formales con la dirigencia política. El fracaso del diseño económico del régimen se hizo obvio a fines de 1982 cuando cambios en la política monetaria llevaron a la quiebra a miles de personas y

negocios. Junto con el descontento de parte de la elite económica, un amplio espectro de organizaciones sociales jugó un papel central en este período al expresar la creciente insatisfacción popular ante el evidente colapso económico y la violación de las más elementales condiciones para la participación social y política.<sup>17</sup>

Durante 1983, estos movimientos fueron claves en la transformación de la insatisfacción en movilización efectiva contra el régimen y a favor de la democratización, el respeto por los derechos humanos y mejores niveles de vida. Ha habido mucha discusión al respecto, pero es generalmente aceptado que estos movimientos lograron unir diferentes generaciones de militantes y afirmar la presencia de la izquierda, sin dejar de buscar acuerdos con todos los partidos en relación a sus expectativas y propuestas para el período democrático. Los análisis de esos años suelen describir una breve etapa de "florecimiento de los movimientos sociales" que fue aprovechada por los partidos para forzar al gobierno a negociar.<sup>18</sup> La gran concentración para conmemorar el Día de los Trabajadores el 1° de Mayo de 1983 por primera vez en diez años demostró la fortaleza de la movilización popular. Fue organizada por el recientemente formado Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que supo aprovechar la restrictiva legislación laboral vigente para expresar reclamos largamente reprimidos y revivir el legado de la CNT, la organización de trabajadores ilegalizada luego del golpe de Estado. En setiembre de 1983, los estudiantes universitarios manifestaron públicamente una aspiración similar de participación, especialmente en relación a la propuesta oficial de limitación del ingreso a la enseñanza superior y otras medidas restrictivas. La nueva Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) también evocaba la presencia de la prohibida federación de estudiantes de los años anteriores al golpe. Junto con la muy activa Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua y otras organizaciones sociales, el PIT y la ASCEEP fueron los principales promotores de la ola de movilizaciones del año 1983.<sup>19</sup>

Frente a la presión de la oposición unida y movilizadora, el gobierno finalmente desproscribió a los dirigentes de los partidos



tradicionales con excepción de Ferreira Aldunate. La izquierda también permaneció proscrita, pero tanto blancos como colorados cultivaron vínculos con sus dirigentes y con los poderosos movimientos sociales. Las movilizaciones populares culminaron en una gigantesca manifestación el 27 de noviembre de 1983, en la que todos los partidos anunciaron su negativa a participar en elecciones con proscripciones y exigieron el inmediato reestablecimiento de los derechos civiles y políticos como condición para continuar las negociaciones. Más allá de un llamado general a terminar con la represión y liberar a los presos políticos, los reclamos de derechos humanos no fueron fundamentales para la mayoría de los actores políticos más importantes de esta etapa. Las organizaciones coordinadoras de las fuerzas opositoras, como la Intersectorial y la Multipartidaria, evitaron declaraciones explícitas al respecto e intentaron preservar el nivel mínimo de acuerdo alcanzado por los partidos políticos y las organizaciones sociales.<sup>20</sup>

Pero las diferencias estratégicas igual terminaron por romper el frente de oposición. Mientras la mayoría de los blancos apoyaba el enfoque confrontacional de Ferreira Aldunate, otros estaban de acuerdo con los colorados en seguir negociando a pesar de las proscripciones. En enero de 1984, los blancos más radicales y la izquierda respaldaron el primer paro general desde el golpe, lo que llevó a los colorados a retirarse de la Intersectorial en protesta contra lo que veían como una medida arbitraria. Dos meses después, Seregni fue liberado y se manifestó inmediatamente a favor de una estrategia negociadora. Al eslogan de "movilización, concertación, negociación", acuñado en prisión, agregó la idea de FA como "obrero de la construcción del futuro".<sup>21</sup> El gobierno, a su vez, empezó a considerar al FA como un interlocutor posible para futuras conversaciones. En junio, los blancos se retiraron de la Multipartidaria en protesta por la decisión de los otros partidos de negociar a pesar de que tanto Ferreira Aldunate como Seregni seguían proscritos. El 16 de junio, Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl, que vivían en Buenos Aires desde hacía varios meses, volvieron a Uruguay con la esperanza de cambiar el rumbo de la transición y forzar a los militares a

desproscribirlos. Su retorno, sin embargo, no tuvo el efecto esperado y fueron detenidos a su llegada. Como respuesta, los otros partidos acordaron llevar a cabo un paro cívico nacional el 27 de junio, pero el día anterior decidieron sorpresivamente iniciar las negociaciones. Trabajosas conversaciones llevaron al acuerdo del Club Naval en agosto de 1984, que abrió el camino para las elecciones nacionales de noviembre. El acuerdo se celebró entre los militares, los colorados y una representación explícitamente legalizada del todavía proscrito Frente Amplio. Aunque pensaban participar de las elecciones, los blancos se autoexcluyeron de las negociaciones y rechazaron el acuerdo.<sup>22</sup>

Uno de los primeros analistas de la transición subraya el papel de Seregni en todo este proceso, utilizando las ideas de "movilización, concertación y negociación" para resumir las estrategias de los tres partidos mayoritarios a lo largo de 1984. Para los colorados, la movilización "era imposible, por falta de militantes", pero apoyaron la concertación con otros actores políticos "para evitar [el] riesgo de aislamiento" y la negociación "para ofrecer a los militares [una] salida honorable". Los blancos alentaron la movilización para "radicalizar la oposición", pero quedaron cada vez más aislados y terminaron por no participar en las negociaciones. Finalmente, la mayoría del FA siguió la estrategia diseñada por Seregni: apoyó la movilización para "aumentar [su] presencia y fuerza negociadora", promovió la concertación para "presentarse en pie de igualdad [con los otros partidos] y plantear temas sociales" y participó en las negociaciones "para volver a entrar al juego legal de la política".<sup>23</sup>

Es evidente que la participación del FA terminó legitimando lo que de otro modo hubiera sido un pacto entre los militares y los colorados. Para la izquierda, la aceptación de las negociaciones fue una oportunidad para reconstruir la coalición y adquirir peso político. Contra el deseo de algunos de sus integrantes, el FA ingresó en la arena política a cambio de aceptar las restrictivas reglas del juego. A esa altura, la mayoría de los grupos de izquierda privilegiaban claramente la negociación sobre la movilización popular como la mejor estrategia para alcanzar una rápida democratización. Seregni,

en particular, sentía que Ferreira Aldunate había estado aislado por el exilio y por eso subestimaba el poder del gobierno. Justificaba su posición con el argumento de que la transición no podía ser sacrificada por una persona y que muchos dentro del FA habían aceptado sus proscipciones, incluido él mismo, además del PCU y otros grupos. Pero no hay que olvidar que, a diferencia de los blancos, la coalición de izquierda tenía pocas posibilidades de triunfar en las elecciones nacionales. Sanguinetti y el Partido Colorado tenían más en juego. Con Ferreira Aldunate en la cárcel y Seregni proscrito, los colorados basaron su campaña en la moderación y el pragmatismo y obtuvieron el 42% de los votos en noviembre de 1984. Los blancos lograron el 35%, mientras que el FA tuvo un destacable 21% de la votación. Un nuevo gobierno colorado asumió el poder en marzo de 1985, con total aceptación de todas las fuerzas políticas.<sup>24</sup>

Es fácil ver hasta qué punto la estrategia promovida por Seregni y otros dirigentes del FA que actuaban dentro de Uruguay afectó a los exiliados de izquierda que habían trabajado con Ferreira Aldunate en el exterior y que siguieron participando en la CDU hasta principios de 1984. Los debates sobre qué hacer en las elecciones internas de 1982 revelaron la importancia de los exiliados en el diseño de las estrategias de la izquierda, con los principales dirigentes del PCU y el FAE apoyando inicialmente a Ferreira Aldunate, su aliado en la CDU. Por el momento, la unión con el líder blanco superó la prueba ya que éste no pareció resentir la resolución final de sus aliados de votar en blanco, básicamente porque sabía que de todos modos había recibido miles de votos desde la izquierda. Según sus declaraciones a *Estudios*, la revista del PCU en el exilio: "Lo que quedó demostrado esta vez es que somos juntos y separados mayoría".<sup>25</sup> No fue sino hasta que el Frente Amplio decidió iniciar negociaciones con los militares en 1984 que la CDU se disolvió bajo el efecto de muchas presiones contradictorias, demostrando que los acontecimientos dentro de Uruguay tenían ya más peso que cualquier alianza forjada en el exilio. En su despedida a la CDU, el Secretario General del PCU explicó:

La CDU nació para promover la solidaridad con el pueblo uruguayo y difundir la idea de la coincidencia y coordinación en la lucha de todos los adversarios de la dictadura. Esa idea ha encarnado hoy, en Uruguay, en la acción unida de las masas y en la potencial concertación de todos los partidos y fuerzas sociales e intelectuales que combaten por el rescate de la democracia. Para facilitar ese indispensable proceso CDU se disuelve [...] Nos parece una decisión inteligente y patriótica.<sup>26</sup>

Además de su opinión sobre la CDU, Arismendi expresaba en este pasaje un punto de vista que compartían muchos otros exiliados de izquierda en ese período. Los periódicos y boletines publicados entre 1980 y 1984 muestran que todos los grupos y partidos que actuaban fuera de Uruguay estaban de acuerdo en un punto: los hechos políticos importantes estaban teniendo lugar dentro del país. Mientras que en años anteriores algunos exiliados habían tendido a exagerar los logros de la oposición clandestina, los materiales editados en Madrid, Estocolmo y México después de 1980 no lograban cubrir la cantidad de actividades contrarias al régimen que ocurrían en Montevideo. En vistas de la nueva situación, los exiliados empezaron a reconocer que sus actividades habían cambiado de significado: las viejas discusiones en cuanto a la legitimidad del FAE y la validez del "acuerdo de México", por ejemplo, decayeron ante el surgimiento de nuevas prioridades políticas.<sup>27</sup> Sin renunciar a su deseo de ser tomados en cuenta dentro de Uruguay, procuraban ahora comprender qué estaba sucediendo en un país del que se habían ido hacía diez años e intentaban adaptar sus estrategias a los sofisticados manejos políticos del período de la transición.

El colapso de la CDU en 1984 fue sólo uno de los resultados, quizás el más notorio, de las nuevas circunstancias. Dejó en evidencia, tardíamente, que muchos partidarios de Ferreira Aldunate en Uruguay siempre se habían sentido incómodos con el trabajo de Juan Raúl con la izquierda. Con la determinación de transformarse en el líder absoluto de su partido y ante la perspectiva de la próxima competencia electoral, Ferreira Aldunate se separó de sus aliados en la CDU.<sup>28</sup> Siempre había admitido que no pretendía que ésta siguiera

existiendo luego del fin de la dictadura, ya que no reflejaba la composición de su electorado en Uruguay. Había sido creada para ejercer presión a nivel internacional en una época en que la actividad política dentro de Uruguay era prácticamente inexistente, pero se había convertido en un estorbo ahora que el país estaba experimentando una apertura política. En este punto, Seregni opinaba de un modo similar. En setiembre de 1983 había dicho que la permanencia de la CDU era un obstáculo para la consolidación de la izquierda como actor político independiente en el período de la transición. En abril de 1984, el plenario del Frente Amplio en Uruguay decidió que todos sus partidarios debían dejar de participar en la CDU.<sup>29</sup>

Simultáneamente, el PCU y el PS, los principales miembros de izquierda de la CDU, se alinearon con la estrategia negociadora de Seregni, que implicaba aceptar las proscipciones de muchos de sus dirigentes y militantes. A esta altura, muchos en la izquierda, tanto fuera como dentro de Uruguay, estaban dispuestos a subordinar algunos de sus reclamos frente al objetivo más urgente de provocar la caída del régimen. Si bien referían frecuentemente a sus principios, no ocultaban que sus razones eran básicamente de orden práctico:

Cuando el Frente Amplio adoptó la decisión de aceptar nuevas conversaciones con los jefes militares, lo ha hecho sin claudicar a ningún principio, por el contrario, teniendo en cuenta consideraciones tácticas totalmente justas. Si bien la dictadura no parece estar en condiciones de derrotar al movimiento democrático, éste, por el momento, no está tampoco en condiciones de triunfar en un acto de superior confrontación con el régimen. El Frente Amplio entiende que [...] deben prevalecer los intereses generales por sobre las consideraciones tácticas de un solo partido.<sup>30</sup>

Pero esta posición negociadora estaba lejos de ser unánime dentro de la izquierda, tanto en el exilio como en Uruguay. De hecho, algunos sectores que habían apoyado a Seregni en las elecciones internas de 1982 eran ahora reacios a secundar su postura moderada y preferían una estrategia más confrontacional. Se opusieron a la participación

en el acuerdo del Club Naval y convocaron a una mayor movilización popular. Erro y el PVP fueron los principales defensores de esta posición en el exilio. Una vez más llamaron a unir los sectores más radicales de la izquierda para confrontar las "tendencias conciliadoras" de sus compañeros. Después de algunas transacciones con los GAU y otros grupos pequeños, se integraron a la Izquierda Democrática Independiente (IDI) en 1984. Como nuevo miembro del FA, la IDI pasó a representar esta posición dentro de Uruguay, reclamando derechos exclusivos sobre la herencia de la vieja "corriente/ tendencia".<sup>31</sup>

En esta reconfiguración interna estaba en juego otra vez la pregunta de qué pasaría luego de la tan esperada caída de la dictadura. Todos los grupos y partidos referían al tipo de democracia que querían y generalmente agregaban adjetivos como "popular", "avanzada" o "real" para rechazar la mera idea de "restaurar" el marco legal anterior al golpe de 1973. Sin embargo, existían notorias discrepancias en sus enfoques sobre el tema. La promoción de cambios sociales radicales en el corto plazo no era ya el centro de esta discusión ya que la mayoría reconocía que no era una plataforma adecuada para el período de la transición, aunque continuaba adhiriendo a ella como un objetivo de mediano y largo alcance. Nadie cuestionaba tampoco la necesidad de encontrar una salida rápida ni la de asociarse con grupos de oposición más moderados para lograrlo. La mayoría de los sectores más radicales reconocía que el gobierno todavía era fuerte y que las condiciones no estaban dadas para un levantamiento popular en su contra. De hecho, con unas pocas excepciones, veían algún tipo de solución no violenta como el medio más plausible de poner fin a la dictadura. Un buen ejemplo de esto fue la propuesta de 1983 de reorganizar la "corriente", respaldada por Erro, que llamaba a la movilización popular en apoyo de una plataforma que incluía elecciones generales, una asamblea constituyente y un gobierno provisorio.<sup>32</sup>

Sin embargo, estos grupos y dirigentes creían que participar en las negociaciones de 1984 significaba avalar las proscipciones y la represión aún existentes. Obviamente, el punto clave no era la

situación de Ferreira Aldunate sino más bien los cientos de presos políticos y los miles de militantes a los que todavía se les prohibía cualquier tipo de participación política. Sostenían que la izquierda estaba renunciando a sus principios y que el acuerdo del Club Naval era una base inadecuada para la nueva era democrática. El PVP, Erro y otros grupos pequeños respaldaron lo que puede denominarse "maximalismo ético", una posición que los llevó a rechazar cualquier supuesto "continuismo" no sólo con respecto a la dictadura sino también del marco legal represivo de principios de los setenta. Según un documento del PVP: "Democracia, para ellos, son elecciones, aunque sean con proscritos y presos. Para esa visión, la voluntad popular sólo puede expresarse ordenadamente, dentro del sistema político legal aunque esta legalidad siga siendo recortada, arbitraria, y velada por los déspotas".<sup>33</sup>

Estos mismos sectores habían pedido durante largo tiempo el debate interno de esos temas. Contrariamente al PCU y al PS, por ejemplo, que construyeron su alianza con Ferreira Aldunate eludiendo compromisos de mediano y largo plazo, ellos exhortaban constantemente a la izquierda a discutir qué tipo de régimen democrático sustituiría al autoritario, antes de definir las estrategias y coaliciones de transición con otros grupos. El PVP argumentaba que la izquierda debía defender propuestas sociales alternativas no sólo como objetivos a largo plazo sino también como parte de sus tratos con el resto de la oposición y respaldar sus reclamos con renovados llamados a la movilización popular. Estaban particularmente interesados en rebatir la "ofensiva de viejas ideas-fuerza de la ideología burguesa" de los partidos tradicionales que defendían "la democracia [...] del Estado capitalista" y despreciaban "las otras formas de participación democrática que los trabajadores y el pueblo construyeron con sus luchas".<sup>34</sup> Erro también advirtió sobre asociarse con los partidos tradicionales y llamó a recordar que blancos y colorados habían aprobado la legislación represiva anterior al golpe de 1973, facilitando "el asesinato, la tortura y la cárcel que segaron la vida de nuestras juventudes y de todo un pueblo".<sup>35</sup> Estos sectores apoyaron a los emergentes movimientos sociales y resintieron fuertemente lo

que consideraban una preferencia por las maniobras y negociaciones políticas por parte de Seregni y la mayoría de la izquierda. Un documento del PVP sostenía en 1984 que:

La discusión sobre la salida política hoy debe necesariamente incorporar el gran hecho nuevo que nos dejan las movilizaciones del 83: la irrupción de una movilización popular [...] Los hechos de los últimos meses son ilustrativos: mientras la búsqueda conciliadora de concesiones por parte de los militares no ha representado ningún avance, la movilización popular, valerosa y crecientemente ha ido ocupando espacios cada vez más importantes y reconquistando, ejerciéndola, mayores posibilidades de acción política.<sup>36</sup>

En contraste con esta posición, el PS, el PCU, el PDC y todos los partidarios de participar en las negociaciones del Club Naval fundaban su posición en la fuerza que el régimen seguía teniendo y en la urgente necesidad de encontrar una salida. Demostraron ser la mayoría de la coalición de izquierda: el plenario del FA votó a favor de los términos del acuerdo por treinta y un votos contra catorce, con seis abstenciones. Los integrantes de esta mayoría presentaron su postura como pragmática y desinteresada: la mejor solución para el pueblo uruguayo. Según los resultados de las elecciones de noviembre de 1984, lograron transmitir esta idea a los muchos ciudadanos que los votaron. Las opciones contrarias al pacto tuvieron una votación bastante más escasa.<sup>37</sup>

## DERECHOS HUMANOS Y TRANSICIÓN

Las páginas precedentes mostraron cómo los acontecimientos políticos ocurridos dentro de Uruguay después de 1980 afectaron las posiciones de los exiliados. En años anteriores, los grupos y partidos de izquierda que actuaban en el exterior habían consagrado grandes esfuerzos a denunciar las violaciones de derechos humanos en su país como una forma de aportar a la lucha contra la dictadura. Aunque

estas actividades no lograron superar las divisiones partidarias y sostener una acción política común, fueron fundamentales en la militancia del exilio en la segunda mitad de los setenta. Los exiliados no abandonaron sus esfuerzos de denuncia después de 1980, pero la transición redefinió su significado político. Además, los años ochenta no fueron tiempos favorables para plantear estos temas a escala global. Mientras que en los setenta el gobierno de Estados Unidos, la ONU y la OEA, tres de los actores más influyentes en el caso uruguayo, habían apoyado normas internacionales más fuertes sobre derechos humanos, la preocupación decayó en la década siguiente, principalmente debido a cambios sustanciales en la política exterior estadounidense.

En las elecciones presidenciales de 1980, los Demócratas perdieron la Casa Blanca ante Ronald Reagan. En su influyente artículo de 1979 "Dictaduras y dualidad de criterios", la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Jeane Kirkpatrick, ya había dado los fundamentos teóricos para la política exterior de la nueva administración. Sostenía que los regímenes "autoritarios" eran preferibles a los "totalitarios" y que la "dualidad de criterios" implícita en las políticas de Carter ponía en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos: los regímenes amigos de derecha eran más hostigados que los regímenes socialistas que constituían la verdadera amenaza. Argentina y Chile fueron ejemplos centrales en la crítica de Kirkpatrick. Otros analistas de la política latinoamericana estuvieron de acuerdo en que las agresivas actitudes de Carter no habían terminado con los gobiernos militares y cuestionaron si sus logros y costos eran justificados. En 1980, un grupo de asesores republicanos, autodenominado Comité de Santa Fe, publicó un proyecto para una nueva política en el continente, haciéndose eco del ensayo de Kirkpatrick. En 1982, la administración siguió puliendo su enfoque y comenzó a invocar los derechos humanos para legitimar agresiones y operaciones encubiertas. Las normas de derechos humanos empezaron a ser consideradas como instrumentos en una guerra que las trascendía, en especial en América Central, como lo demuestran las políticas hacia Nicaragua y El Salvador. Aunque Reagan parecía saber o preocuparse

poco del resto de América Latina, no dudó en apoyar a los regímenes autoritarios sudamericanos y reestablecerles la ayuda económica y militar negada bajo Carter. El Congreso había prohibido de forma explícita esta ayuda, pero la nueva administración se las arregló para fomentar relaciones cordiales con esos regímenes. Reagan adoptó una "diplomacia discreta" e hizo de los derechos humanos un tema de discusiones privadas entre amigos.<sup>38</sup>

Con respecto a Uruguay, su administración no dudó en dismantelar la política de Carter. El reconocimiento por parte del gobierno de su derrota en el plebiscito de noviembre de 1980 y la definición del nuevo presidente, General Álvarez, como un "moderado" fueron los argumentos para una postura más favorable hacia el régimen autoritario.<sup>39</sup> Julio de 1981 fue el mes clave en este cambio de actitud. A principios de ese mes, el Departamento del Tesoro informó al Comité de Asuntos Bancarios, Financieros y Urbanos de la Cámara de Representantes que daría instrucciones a los delegados estadounidenses en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar préstamos a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El Departamento de Estado fundamentó la decisión:

El Departamento ha revisado la actual situación de derechos humanos en esos países y ha determinado que no se ajustan al criterio que requeriría un voto negativo o abstención para préstamos no destinados a necesidades humanas básicas [...] Sigue habiendo problemas de derechos humanos. Pero, si somos capaces de tener una política de derechos humanos que siga alentando el progreso, tenemos que estar dispuestos a reconocer las mejoras que han ocurrido.<sup>40</sup>

El Comité mantuvo audiencias para analizar la decisión y criticó la interpretación e implementación de la legislación de derechos humanos del Ejecutivo.<sup>41</sup> Con un ánimo similar, se reunió el Comité Económico Conjunto del Congreso para estudiar las políticas económicas estadounidenses a la luz de la futura conferencia de Ottawa entre líderes de países industrializados occidentales. Durante esas audiencias, algunos congresistas se opusieron a la decisión de revertir

las reglas de votación de Estados Unidos sobre préstamos bancarios multilaterales a regímenes autoritarios del Conos Sur.<sup>42</sup>

Al enfrentar a un Departamento de Estado que con frecuencia censuraba a sus críticos y tenía conflictos con los defensores de los derechos humanos, estas acciones del Congreso mostraban que los cambios de los setenta en la toma de decisiones de política exterior estaban ya institucionalizados.<sup>43</sup> Además, las redes de derechos humanos funcionaban a pleno y los grupos de presión estadounidenses dedicaban grandes esfuerzos a rebatir las políticas de la nueva administración. Algunos de estos grupos prestaron atención a la situación en Uruguay. AIUSA, por ejemplo, continuó con sus actividades para presionar ante la opinión pública y los encargados de la política exterior. Sus miembros escribieron cartas a las autoridades uruguayas, siguieron la situación de los presos políticos y se pusieron en contacto con otros actores que podían hacer oír su descontento a niveles más altos del gobierno, el sistema político y la sociedad en general. El caso de Miguel Mato Fagiani, secuestrado por fuerzas militares en Montevideo en enero de 1982, es un buen ejemplo del trabajo de AIUSA en esos años, mostrando las múltiples conexiones entre los activistas de derechos humanos y los uruguayos que vivían en Estados Unidos. El principal vínculo entre el grupo de adopción de Miguel en Florida y sus parientes en Montevideo fue su tía Esther Fagiani, una enfermera residente en Pennsylvania. Ella mantuvo a los integrantes de AIUSA al tanto de las novedades del caso e informó a su familia en Uruguay sobre las gestiones en Estados Unidos. Los activistas de AIUSA en Miami y Washington, a su vez, transmitían a Londres la información de Esther para nutrir los registros centrales de las actividades dedicadas a Uruguay.<sup>44</sup>

Los miembros de las secciones locales de AIUSA eran parte de un movimiento a nivel nacional que ofrecía ayuda directa a quienes sufrían violaciones de derechos humanos en América Latina, a la vez que difundían sus reclamos mediante redes de télex, teléfono y fax para presionar al Congreso e influir en la política exterior de Estados Unidos. A fines de los setenta y principios de los ochenta, varios de los grupos que antes se dedicaban a Sudamérica se reorientaron hacia las

situaciones más apremiantes en Nicaragua y El Salvador, pero no abandonaron su interés por Argentina, Chile y Uruguay. Junto con AIUSA, el National Council of the Churches of Christ [Consejo Nacional de Iglesias de Cristo] y otras organizaciones religiosas mantuvieron su preocupación por el Cono Sur.<sup>45</sup> Estos grupos fueron muy importantes para abrir un espacio político de protesta a las políticas de Reagan y exigir a sus representantes en el Congreso que respondieran a su electorado en temas referentes a América Latina. Además, al enfrentarse a una administración que no ofrecía información confiable sobre derechos humanos, asumieron el papel de eficientes fiscales, mantuvieron fuertes vínculos con los países afectados y lograron obtener conocimiento de primera mano sobre lo que estaba ocurriendo.<sup>46</sup>

La CDU siguió teniendo acceso a los grupos de presión estadounidenses. Estos exiliados uruguayos ya eran conocidos por muchos de los involucrados en el diseño de la política de Estados Unidos hacia América Latina y utilizaron esas conexiones para presentar sus reclamos. En mayo de 1981, por ejemplo, lanzaron una campaña por el respeto del pronunciamiento ciudadano contra la propuesta del gobierno en el plebiscito de 1980. Entre las más de cinco mil firmas que respaldaban la petición estaban la del senador E. Kennedy y otros treinta y dos congresistas, junto a las de otros políticos, activistas de derechos humanos y líderes religiosos estadounidenses.<sup>47</sup> Un mes después, el grupo patrocinó un simposio sobre las perspectivas para la democracia en su país, organizado por la WOLA y la American University en Washington, DC. La lista de oradores reflejaba la variedad de actores que se unieron para presionar por el caso uruguayo en Estados Unidos: Juan Raúl Ferreira (CDU), Edy Kaufman (AI), Horacio Sevilla Borja (Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos) y Jean Louis Weil (SIJAU). También fue invitado Robert Service, Director de Asuntos del Cono Sur del Departamento de Estado, quien resumió la política de la administración Reagan, resaltó el apoyo uruguayo a las posiciones internacionales de Estados Unidos, señaló los intereses comerciales en Uruguay, alabó la cooperación en la seguridad hemisférica y lamentó que las relaciones entre ambos países se hubieran visto afectadas por las preocupaciones de derechos humanos.<sup>48</sup>

Cada vez que pudieron, los exiliados uruguayos nucleados en la CDU rechazaron este tipo de argumentación y subrayaron la influencia que podía tener Estados Unidos en la transición a la democracia en su país. Así ocurrió en 1981, por ejemplo, cuando el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes realizó audiencias sobre una propuesta de transferencia de artículos de defensa estadounidenses de Corea al gobierno uruguayo. Los demócratas señalaron la continuación de las violaciones de derechos humanos en Uruguay para rebatir la postura favorable de la administración. El portavoz del Departamento de Estado no negó las violaciones, pero defendió las "medidas ya tomadas" por el gobierno uruguayo, mencionó el "nuevo curso económico" del país y señaló que Estados Unidos apoyaría procesos controlados de transición a la democracia en el Cono Sur. Al igual que Service, se refirió también a la respuesta positiva de Uruguay al pedido de los gobiernos de Egipto, Israel y Estados Unidos de participar en las Fuerza y Observadores Multinacionales en el Sinaí. Juan Raúl Ferreira intervino en las audiencias para calificar de "engañosa" la información del Departamento de Estado y concluir que las "actitudes adoptadas por la nueva administración han fortalecido las posiciones de la dictadura [...] y [...] los partidarios de la línea más dura dentro del régimen".<sup>49</sup> Sus palabras no tuvieron ningún impacto en la nueva posición de Estados Unidos. Con la atención del Congreso desviada hacia América Central, los opositores a la transferencia de armas no pudieron reunir los votos necesarios. En términos más generales, es difícil evaluar la influencia que tuvieron estas voces en la transición a la democracia en Uruguay, aunque es claro que el descrédito internacional fue ciertamente un factor importante. En cualquier caso, la transición uruguaya se ajustó al patrón promovido por la administración Reagan de un camino pacífico (y bajo control militar) hacia gobiernos moderados electos por voto popular.<sup>50</sup>

Del mismo modo que desconoció los principios de derechos humanos en las relaciones bilaterales, la administración Reagan lanzó un ataque frontal contra el sistema de derechos humanos de la ONU. La embajadora Kirkpatrick acusó a la organización internacional

de ser "selectiva" en la elección de sus casos y de "politización" con respecto a los "amigos" de Estados Unidos en América Latina. A principios de 1981, los representantes estadounidenses comenzaron a impugnar el nuevo Grupo de Trabajo sobre Desapariciones y colaboraron en la destitución de Theo Van Boven, el director holandés de la División de Derechos Humanos, que había establecido el grupo de trabajo y era un firme crítico de la política de Reagan. En su lugar, se designaron funcionarios menos comprometidos con la lucha por los derechos humanos.<sup>51</sup> Este desmantelamiento del aparato de derechos humanos explica por qué aunque la ONU siguió investigando "violaciones graves" sus funcionarios empezaron a ver su trabajo más como de mediación que como de crítica. Al ritmo de la nueva política exterior estadounidense, los derechos humanos fueron perdiendo fuerza en las relaciones internacionales.

Ya familiarizados con los complejos mecanismos de la ONU, los exiliados uruguayos siguieron presentando casos al Grupo sobre Desapariciones y presionando ante diferentes comités y comisiones.<sup>52</sup> Pero perdieron entusiasmo sobre los resultados de estas actividades. Sus periódicos y boletines comenzaron a prestar cada vez menos atención a las decisiones de la ONU y la OEA y se llenaron de airadas críticas a Reagan y las políticas estadounidenses en América Latina, refiriendo al enfoque de Carter como una corta pausa en el sostenido apoyo de Estados Unidos a los regímenes autoritarios de derecha.<sup>53</sup> Este desencanto de los exiliados sobre los ámbitos controlados por Estados Unidos los llevó a redoblar esfuerzos por encontrar aliados influyentes en otras zonas del mundo. Desde los primeros tiempos de su destierro, habían desarrollado fuertes vínculos con gobiernos y militantes de Europa y América Latina y estos contactos parecieron intensificarse en los ochenta.<sup>54</sup> Además, la publicidad internacional acerca de los procesos de democratización en el Cono Sur les abrió nuevas audiencias. En noviembre de 1982, por ejemplo, una delegación sindical uruguaya de visita en Italia aprovechó la atención que prestaban los medios a los casos de ciudadanos italianos desaparecidos en Argentina para señalar que Uruguay también tenía su cuota de italianos desaparecidos.<sup>55</sup>

Pero, en términos generales, más allá de esta reorientación geográfica, es claro que el interés de los exiliados por el sistema internacional de derechos humanos tendió a disminuir en los ochenta. La principal razón para este cambio no debe buscarse en sus percepciones de la política mundial sino en su renovado interés por la escena política uruguaya. Aunque los exiliados continuaron con sus actividades transnacionales, los cambios posteriores al plebiscito de 1980 los llevaron a reconsideraciones importantes. Sus contactos con Montevideo se hicieron más fluidos, lo que aumentó su capacidad de incidir en los acontecimientos locales.<sup>56</sup> Una vez que se dieron cuenta de que podían tener cierta influencia dentro del país, los exiliados dirigieron sus esfuerzos a respaldar la movilización interna contra la dictadura. Una publicación del PVP estableció claramente en 1981 que:

De aquí en adelante la tarea [de los exiliados] de solidaridad en el exterior ya no será únicamente con los que sufren la represión. Ahora hay [...] un movimiento popular en marcha, que lenta pero seguramente comienza a retomar la iniciativa en diversos planos de la lucha política y social contra la dictadura. Y por lo tanto las propias características de la actividad en el exilio deben tener en cuenta estos cambios.<sup>57</sup>

Luego de algunas desavenencias iniciales, principalmente en lo relativo a la participación de comunistas y socialistas en la CDU, la iniciativa política se trasladó a la dirigencia del FA dentro de Uruguay que definió la participación en una salida negociada y la reconquista de un espacio como las principales tareas del momento. Al igual que los demás negociadores del Club Naval en 1984, los líderes de la izquierda evitaron hablar de las violaciones a los derechos humanos, ya que la experiencia de conversaciones anteriores indicaba que el tema sacaría a relucir diferencias irreconciliables: "Aquí venimos a hablar del futuro", fueron las primeras palabras del líder socialista Cardoso, representante del FA en las conversaciones, demostrando que sabía bien que los militares se oponían a cualquier clase de "revisiónismo".<sup>58</sup> Ya en setiembre de 1982, el presidente Álvarez había

dicho que había que "descartar cualquier pensamiento o intento de proceder a una revisión de las acciones y de la difícil y dolorosa contribución de las Fuerzas Armadas, tanto ahora como en el futuro".<sup>59</sup> Esta posición se endureció en los años siguientes, cuando empezaron en Argentina las acciones para juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Para Seregni, Cardoso y otros dirigentes, hacer del FA una opción política creíble significaba dejar de lado los reclamos más radicales en materia de derechos humanos. Aún antes del acuerdo del Club Naval, esta estrategia llevó a una ruptura importante dentro de la izquierda: de un lado, aquellos que aprobaban las negociaciones para acelerar la recuperación de los más básicos derechos civiles y políticos; del otro, los que convocaban a la movilización en pos de objetivos más radicales, incluido el juicio a los violadores de derechos humanos.

Los principales representantes de la primera posición en el exilio eran los dirigentes comunistas y socialistas, miembros relevantes del FA que por lo general se abstendían de reclamar abiertamente acciones de penalización contra los acusados de crímenes de derechos humanos. A principios de los ochenta, cuando todavía existía la CDU, estos grupos se dedicaron a presionar ante gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales para obtener apoyos de alto nivel para el proceso de democratización en Uruguay. La CDU denunció la represión contra la oposición y trabajó para mejorar la situación de los derechos humanos, pero no propuso ninguna fórmula concreta para juzgar a los responsables de esas violaciones. En palabras de Juan Raúl Ferreira, presidente de la CDU, a principios de 1982: "Hoy nos interesa más el tema de las perspectivas democráticas que el de la denuncia".<sup>60</sup>

Además, los integrantes de izquierda de la CDU sabían que ésta no era un grupo de presión dedicado a reclamar por los derechos humanos sino una alianza temporal de sectores que se oponían al régimen autoritario con una plataforma de corto plazo que privilegiaba la defensa de la legalidad democrática y evitaba todo debate potencialmente divisorio. En los ochenta, una vez que las posibilidades de participación política se ampliaron dentro del país, cada



grupo comenzó a desarrollar su propia estrategia y su trabajo conjunto se hizo problemático. Luego de la disolución de la CDU en abril de 1984, los comunistas y los socialistas respaldaron el planteo negociador del FA, que no era compatible con la insistencia en el castigo de los acusados de violaciones de derechos humanos. El PCU siguió denunciando la prisión política y hablando de lo que sus integrantes habían sufrido durante el período autoritario, pero sin mencionar el tema de la justicia en la etapa de la transición. De hecho, este partido terminó apoyando a Seregni y la mayoría de la izquierda en su renuncia tácita a una amnistía inmediata e irrestricta para los presos políticos, que había sido parte de las transiciones negociadas en Brasil y España, por ejemplo, pero que se presentaba como un obstáculo para lograr un acuerdo en Uruguay. Sin embargo, los militares liberaron a 411 presos que habían cumplido más de la mitad de su sentencia, con la idea de facilitar la participación de la izquierda en las negociaciones.<sup>61</sup>

Otros grupos de izquierda dentro y fuera de Uruguay argumentaron en contra de intervenir en las negociaciones, convocaron a una mayor movilización popular, se asociaron con los movimientos sociales e insistieron en discutir qué democracia querían antes de definir cualquier estrategia de transición. Estos sectores creían que la izquierda debía mantener su programa de cambio radical no sólo como un objetivo a largo plazo sino también como parte de sus conversaciones con otras fuerzas de oposición. Asimismo, pedían algún tipo de compromiso de parte de los partidos políticos para promover la investigación y la justicia en relación a las violaciones de derechos humanos. En su opinión, Seregni, los comunistas y otros sectores del FA habían renunciado implícitamente no sólo a juzgar a los acusados de crímenes de derechos humanos sino también a la exigencia de una amnistía general e inmediata. Fue, en palabras del líder exiliado Enrique Erro, una "capitulación total": "No debió aceptar el Frente Amplio sentarse a negociar con miles de ciudadanos proscritos, partidos políticos que formaban el FA y presos políticos".<sup>62</sup> Dentro de Uruguay, a la mayoría del FA le resultó difícil demostrar a sus compañeros más radicales y al público en general que la participación en

el pacto no implicaba una abdicación de principios. Negaron haber aceptado un supuesto "entendimiento privado" entre los colorados y los militares por el cual Sanguinetti habría asegurado que se encargaría de proteger a los militares.<sup>63</sup> Pero los sectores más radicales pensaban que el acuerdo del Club Naval había implicado algún tipo de compromiso para dejar de lado los reclamos de castigo a los culpables. Los principales representantes de esta posición en el exilio eran el PVP y el grupo de Erro, que en 1984 adhirieron a la IDI y no ratificaron la participación en el acuerdo.

En años anteriores, Erro, el PVP y otros grupos más pequeños habían expresado con frecuencia su oposición a otorgar cualquier tipo de amnistía recíproca a los responsables de crímenes de derechos humanos. El PVP había sido particularmente activo en pedir "juicio y castigo" desde finales de los setenta, reclamando con insistencia la investigación y procesamiento del personal civil y militar acusado. En el período de la transición, los documentos de este grupo con frecuencia culpaban a la "oposición tolerada" de aceptar que no se planteara la situación de "presos políticos, rehenes, muertos y desaparecidos".<sup>64</sup> El PVP había reclamado desde tiempo atrás la investigación de los casos de uruguayos desaparecidos en Argentina y estuvo entre los primeros que pidieron amnistía para todos los presos políticos. Apoyaron una amplia coalición por amnistía que incluyera a quienes presionaban el tema por razones humanitarias y jurídicas, aunque aclaraban que sus propias motivaciones eran "principalmente políticas" y defendían una propuesta radical que excluía cualquier forma de "perdón" mutuo.<sup>65</sup> Como parte de este esfuerzo, el PVP dio apoyo sustancial a SIJAU, organización pionera en enmarcar la lucha contra el régimen uruguayo en el lenguaje y los métodos del activismo transnacional de derechos humanos.

SIJAU siguió teniendo un papel fundamental en los años ochenta, abriendo el debate sobre los efectos del autoritarismo y pidiendo soluciones concretas para algunos temas centrales del período de la transición. Dos veces, una en San Pablo en 1983 y otra en Buenos Aires en 1984, convocó a juristas, abogados y activistas de derechos humanos europeos y latinoamericanos para discutir los acontecimientos

que tenían lugar en Uruguay. En ambas ocasiones, los participantes exigieron la restauración integral de la democracia, pidieron amnistía para los presos políticos e instaron a debatir sobre el futuro papel de las Fuerzas Armadas. La reunión de San Pablo tuvo el mérito adicional de plantear la primera propuesta detallada de amnistía de acuerdo a la legislación internacional de derechos humanos y las disposiciones legales uruguayas anteriores al golpe. Alejandro y Mercedes Artucio, dos abogados uruguayos exiliados, presentaron un documento sobre los fundamentos jurídicos y efectos predecibles de la promulgación de una amnistía en Uruguay. Recordaron que la propuesta de SIJAU en 1977 había sido vista por algunos exiliados como una "claudicación" porque apuntaba a las consecuencias de la represión por encima de sus causas sociales. Luego de destacar el alcance de la propuesta, que incluía la restauración total de los derechos civiles y políticos así como algunas indemnizaciones a las víctimas, los dos abogados especificaron su significado para la situación de los presos políticos, asunto al que consideraban de suma urgencia ya que Uruguay tenía el récord regional en la materia. También diferenciaron amnistía de "perdón", justificaron su propuesta en fundamentos humanitarios y políticos, se opusieron a la intervención de la justicia militar y reclamaron la restauración de todas las facultades a los jueces civiles para juzgar a los violadores de derechos humanos.<sup>66</sup>

En setiembre de 1984, SIJAU organizó otra conferencia en Buenos Aires, donde un grupo de abogados, juristas y activistas se reunió nuevamente para debatir la evolución de los procesos de transición en Uruguay y Paraguay. La reciente recuperación de la democracia en Argentina aportó un ambiente optimista para debatir estrategias, buscar apoyos recíprocos y comparar experiencias. En el caso de Uruguay, este clima permitió un fructífero intercambio entre quienes luchaban por los derechos humanos dentro y fuera del país. La reunión de Buenos Aires mostró que los exiliados ya no estaban solos en sus actividades de denuncia. Hasta 1980, habían sido los principales divulgadores de información sobre estos temas a nivel mundial ya que los pequeños grupos de familiares que actuaban en Uruguay tenían vínculos muy débiles con las redes transnacionales de derechos humanos.

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) vino a llenar este vacío en 1981, cuando el sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre formó un grupo para denunciar las violaciones que venían ocurriendo en el país. SERPAJ asumió un estilo bastante vehemente para recordar a otros actores sociales y políticos que "el perdón de Jesús no destierra nunca la lucha por la justicia" y "no tiene miedo a decir la verdad y tomar partido".<sup>67</sup> La actividad del grupo trascendió fronteras y aprovechó las redes establecidas por los exiliados en años anteriores.<sup>68</sup> Dentro del país, SERPAJ convocó a la movilización popular y se vinculó con otros movimientos sociales pero no estableció lazos estrechos con los partidos políticos.<sup>69</sup> También promovió la formación de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar (MFPJM) en 1982 y la fundación de Madres y Familiares de Desaparecidos (MFD) en 1983. Ese mismo año, luego de organizar una huelga de hambre para poner fin al estancamiento de las conversaciones entre partidos y militares, SERPAJ fue declarado ilegal. Recién volvió a organizarse en 1984, durante la campaña electoral. En setiembre, antes de la reorganización, un representante de SERPAJ planteó en la reunión de SIJAU en Buenos Aires una petición de amnistía y reclamó a quien ganara las elecciones de noviembre que obligara a las Fuerzas Armadas a hacerse responsables de sus acciones.<sup>70</sup>

Además de SERPAJ, otros grupos que actuaban en Uruguay enviaron representantes al encuentro, entre ellos el Colegio de Abogados, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), MFPJM, MFD, así como representantes del FA y los sindicatos.<sup>71</sup> Aunque todos se habían preocupado por denunciar las violaciones que ocurrían dentro del país, tenían poca experiencia en activismo de derechos humanos tal como se lo entendía a nivel internacional. En Uruguay, la primera petición de familiares de presos políticos fue presentada al gobierno en 1982 y la primera lista de desaparecidos fue hecha pública en noviembre del año siguiente. No fue sino hasta junio de 1983 que SERPAJ denunció públicamente por primera vez la tortura y reclamó por el secuestro de veinticinco integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas. Hasta 1981, cuando los sectores contrarios al régimen ganaron las elecciones internas del Colegio de

Abogados por primera vez desde el golpe, no actuó ninguna organización de defensa legal de casos de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IELSUR, otras dos organizaciones que se ocupaban de estos temas, se fundaron en 1983 y 1984 respectivamente. Además, el movimiento de derechos humanos se agrupó recién en 1984 con la creación de la Coordinadora de Entidades de Derechos Humanos, formada por los grupos antes mencionados, los tres partidos mayoritarios y las principales organizaciones sociales. Pero esta Coordinadora no actuó afuera de Montevideo.<sup>72</sup> El primer caso que atrajo la atención de los medios y produjo una condena generalizada fue la muerte del médico Vladimir Roslik bajo tortura en una dependencia militar en abril de 1984.<sup>73</sup> A su vez, la mayoría de los partidos no tenía mucho contacto con el movimiento de derechos humanos. En consecuencia, las organizaciones sociales, que tenían posiciones fuertes y se movilizaban constantemente por la amnistía, permanecieron relativamente ajenas a los pasos fundamentales de la transición negociada.<sup>74</sup>

Esta situación contrastaba bastante con Argentina y Chile, donde los grupos de derechos humanos surgieron en los años setenta, poco después de la instalación de los regímenes autoritarios, y tuvieron un papel fundamental en los períodos de transición. En Chile, esos grupos aprovecharon redes sociales y políticas ya existentes, vinculándose con líderes religiosos, militantes e intelectuales. La confianza y las conexiones personales no se habrían afianzado sin la actuación de la Iglesia Católica como un escudo de legitimidad ante la represión y un vehículo para la ayuda internacional. Al principio, estos grupos no mantuvieron lazos formales con los partidos políticos y desarrollaron una agenda puramente humanitaria, pero pronto empezaron a tratar de reconstituir espacios sociales de resistencia, superando la represión y el miedo. Sus actividades tuvieron un "efecto demostrativo" y a fines de los setenta proliferaron los grupos de derechos humanos vinculados, ahora sí, con partidos y círculos intelectuales. La Vicaría de la Solidaridad fue central en la creación de un movimiento de oposición nacional que preparó el terreno para que fuerzas sociales y políticas de mayor alcance presionaran por la democratización en los

ochenta.<sup>75</sup> A diferencia del caso chileno, la Iglesia Católica argentina no fue capaz de ofrecer ningún tipo de apoyo a los grupos de derechos humanos que de todas maneras se organizaron en los peores años de la represión. Algunos existían desde antes del golpe de 1976 y el más importante, Madres de Plaza de Mayo, se fundó muy poco después y logró gran atención y apoyo internacionales. Sus esfuerzos de denuncia fueron un ejemplo para intentos similares en todo el mundo y tuvieron una influencia capital durante la transición a la democracia en 1982 y 1983, cuando la guerra de las Malvinas precipitó la caída del régimen.<sup>76</sup>

Según la bibliografía sobre procesos de democratización en el Cono Sur, son muchas las razones que explican el tardío desarrollo del movimiento de derechos humanos en Uruguay. Al compararlo con otros países sudamericanos, estos estudios subrayan que la Iglesia Católica uruguaya había sido tradicionalmente débil, tenía poca influencia fuera de una limitada esfera religiosa y carecía de conexiones fuertes con los partidos políticos mayoritarios y las organizaciones sindicales. Durante todo el período autoritario, las autoridades eclesiásticas mantuvieron un "silencio oficial" y llegaron a negar su apoyo a SERPAJ en 1981. Además de advertir el limitado papel de la Iglesia, los estudiosos de movimientos sociales en contextos autoritarios señalan que quienes participaban en redes sociales seculares tampoco lograron unirse y organizar grupos de derechos humanos antes de 1981, básicamente por las características de la represión en el país. Algunos rasgos geográficos y demográficos hicieron posible que el aparato represivo persiguiera y paralizara casi todos los espacios de oposición. Las bases de este aparato, especialmente las severas restricciones legales a las libertades individuales aprobadas por el parlamento a fines de los sesenta y principios de los setenta, ya existían al momento del golpe de Estado de 1973 y lograron restringir o eliminar muchos ámbitos donde habría podido organizarse la resistencia. La represión posterior al golpe fue también severa y no disminuyó hasta el fin del régimen, con arrestos masivos, tortura generalizada, prisión prolongada y el control de todas las esferas de la vida, pública y privada.<sup>77</sup>

Más tarde, en el período de la transición, otros factores colaboraron para debilitar los reclamos de derechos humanos dentro del país y terminaron obstaculizando la implementación de políticas de verdad y justicia en el período democrático. Primero, los partidos políticos participaron de todo el proceso de transición: las elecciones internas de 1982 y las nacionales de 1984 alentaron la rivalidad interpartidaria y jugaron en contra de la creación de amplios consensos. El deterioro de la alianza entre Ferreira Aldunate y algunos sectores de la izquierda también impidió la consolidación de un frente común basado en reclamos de derechos humanos. En segundo lugar, la transición se caracterizó por el creciente peso de negociaciones secretas entre delegaciones partidarias y militares. Como los grupos de derechos humanos, principalmente SERPAJ, estaban fuertemente vinculados a los movimientos sociales y ponían el énfasis en la movilización popular, la importancia de las negociaciones aumentó su aislamiento de los pasos decisivos de la transición. El Partido Colorado, que ganó las elecciones de 1984, casi no tenía vínculos con los movimientos sociales pero estableció una relación estrecha con los mandos militares. En tercer lugar, la transición fue acordada entre actores bastante parejos: los militares no lograron obtener las garantías que buscaban inicialmente, pero los representantes partidarios fueron a su vez incapaces de marcar un claro corte con las instituciones autoritarias. Aunque el acuerdo del Club Naval no garantizaba la impunidad de los acusados de violaciones a los derechos humanos, implicaba el reconocimiento tácito de la autonomía institucional de los militares. Además, el pacto representaba la restauración del sistema político preautoritario, incluido un elaborado arreglo electoral que exacerbaba la fragmentación intrapartidaria y promovía componendas programáticas para acomodar diferentes facciones dentro del mismo lema.<sup>78</sup>

Los estudiosos del papel de los derechos humanos en los procesos de transición a la democracia generalmente agregan la "falta de atención internacional" como otro factor para explicar el débil desarrollo del movimiento de derechos humanos dentro de Uruguay. Uno de estos análisis observa que, a diferencia de otros países

sudamericanos, pocas misiones humanitarias visitaron Uruguay en esos años.<sup>79</sup> Otro estudio subraya que la escasez de vínculos internacionales de los partidos tradicionales y el ineficaz papel de la Iglesia limitaron severamente el acceso a fondos provenientes del exterior para proyectos de derechos humanos.<sup>80</sup> Ambas observaciones son parcialmente ciertas y la primera comparación apunta a la hostilidad de las autoridades uruguayas frente a la presión internacional. Sin embargo, pasa por alto las misiones enviadas por la CIJ y AI en 1974, la American Bar Association en 1978 y la Cruz Roja y la ONU en 1979, entre otras. Hubo además varios pronunciamientos de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, el más importante de los cuales fue seguramente la decisión del Congreso de Estados Unidos de suspender la ayuda militar en 1976 por la situación de derechos humanos. Uruguay, que era un miembro pequeño y no muy importante de la comunidad internacional, tuvo bastante atención internacional, ubicándose entre los primeros casos en la agenda de grupos importantes de derechos humanos como AI en los años setenta, mientras que los exiliados denunciaban sin descanso lo que ocurría en su país. Puede ser cierto que el "golpe paulatino fue eclipsado por el violento golpe de Chile" y que "la relativa ausencia de desapariciones [...] puede haber hecho que Uruguay pareciera menos digno de atención".<sup>81</sup> Pero es innegable que los exiliados se las arreglaron para divulgar la existencia de violaciones de derechos humanos frente a amplios públicos internacionales, señalando las especificidades de la represión en su país.

Es por lo tanto sorprendente que su compromiso con el activismo de derechos humanos no afectara de modo sustancial la actividad política dentro de Uruguay en el período de la transición. La bibliografía sobre transiciones a la democracia en el Cono Sur aborda este asunto al sugerir que el quiebre de la alianza entre los blancos y sectores de la izquierda en el exilio hizo fracasar una agenda unificada de derechos humanos. La reorientación de los exiliados de izquierda hacia las tareas políticas internas fue igualmente importante ya que de algún modo disminuyó su preocupación por las actividades transnacionales de derechos humanos. Tanto dentro como fuera del

país, los grupos comprometidos con fuertes plataformas de derechos humanos perdieron terreno ante los sectores más conciliadores. El único eslogan consensual en ese período fue el reclamo por la libertad de los presos políticos, probablemente porque eran demasiados para no ser tenidos en cuenta.<sup>82</sup> Sin embargo, la dinámica de la transición llevó a la mayor parte de la izquierda a respaldar el acuerdo del Club Naval cuando aún había cientos de presos. Recién en marzo de 1985, después del fin de la dictadura, un "Proyecto de Pacificación Nacional" dispuso su rápida liberación.<sup>83</sup> Además, el pacto evitaba cualquier compromiso para castigar a los acusados de violaciones a los derechos humanos. La decisión misma de eludir el asunto mostraba que se consideraba más importante encontrar una salida rápida que exigir verdad y justicia para los crímenes cometidos por el régimen saliente. Desde la perspectiva de la izquierda, se trataba de una decisión más que relevante ya que sus militantes y dirigentes habían sido los principales afectados por la represión durante la dictadura. En ese contexto, cabe preguntarse cómo lidiaron los diferentes grupos y partidos con estos temas, que ya eran claves en su identidad política, en una época en que la mayoría de la izquierda decidió moderar sus reclamos concretos de derechos humanos.

### EL NUEVO HEROÍSMO

A mediados de los setenta, mientras los derechos humanos surgían como un tema de importancia en las relaciones internacionales, los exiliados habían sido pioneros en adoptar este lenguaje para hablar sobre la represión en Uruguay. En contraste con la forma anterior de la izquierda de referirse a estos asuntos, el nuevo lenguaje apuntaba a denunciar los métodos del Estado más que a alabar las virtudes de los militantes afectados, que generalmente eran presentados como víctimas y no como combatientes políticos o sociales. Los exiliados nunca abandonaron las referencias al heroísmo de sus compañeros pero comenzaron a hablar de su sufrimiento no tanto como algo esperable en su trayectoria militante sino como prueba de su capacidad

de resistir frente a un régimen brutalmente represivo. También aprendieron a adaptarse al público al que se dirigían. Hubo algunos intentos de fusionar el heroísmo de izquierda con los derechos humanos en un discurso más articulado pero sin demasiado éxito en el período anterior a la transición. A principios de los ochenta se dio un cambio interesante, ya que los exiliados dirigieron su atención hacia la arena política local donde los reclamos de derechos humanos no habían sido demasiado importantes hasta ese entonces y chocaron rápidamente con las estrategias negociadoras de la mayoría de la izquierda que actuaba dentro del país. Las denuncias de derechos humanos habían sido un planteo moderado, útil para conseguir apoyos de las más diversas organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y actores transnacionales cuando los exiliados no tenían capacidad de incidir en la escena local. En la nueva etapa, ese lenguaje empezó a parecer demasiado radical para el enfoque negociador de la mayoría de la izquierda.

La controversia no refirió tanto a la actividad de denuncia propiamente dicha sino a qué hacer con los legados represivos, legales y políticos del régimen saliente. La distinción entre reclamos de acciones legales para castigar a los acusados de violaciones de derechos humanos, donde el Estado estaba llamado a jugar un papel decisivo, y otras demandas para saber qué había sucedido y divulgar ese conocimiento a la sociedad toda es útil para comprender cómo lidió con esos temas la izquierda uruguaya. En base a esta distinción entre justicia y "verdad", es posible establecer dos bandos definidos por los mismos compromisos partidarios que determinaron las estrategias generales en el período de la transición.<sup>84</sup> Tanto dentro como fuera del país, los más radicales exigían no sólo "verdad" sino también justicia, mientras que los sectores negociadores se centraban en denunciar las violaciones más que en exigir castigo para los culpables de cometerlas y ordenarlas. Los primeros dirigían sus reclamos a los partidos políticos que acabarían por tomar el control del gobierno en el inminente período democrático. Junto con los emergentes grupos de derechos humanos y los movimientos sociales, estos sectores querían que los partidos mayoritarios se comprometieran a

investigar y juzgar a los criminales y a revelar la naturaleza institucional y sistemática de la represión. Los sectores negociadores, que eran la mayoría de la izquierda, evitaron asumir una postura fuerte sobre estos temas: referían a la competencia del sistema judicial para procesar a los supuestos criminales pero no proponían una política concreta de gobierno para asegurar estos procesos. Los principales puntos que distinguían el planteo de estos grupos de las tímidas propuestas de derechos humanos de los partidos tradicionales eran el pedido explícito de aclarar la situación de los desaparecidos y su apoyo a una amnistía irrestricta para los presos políticos.<sup>85</sup>

Aunque diferían en sus posiciones sobre la promoción de justicia para los crímenes de derechos humanos, estos dos bandos convergían en el deseo de hacer público lo que sus militantes habían soportado en los últimos diez años. Hacia el final del régimen autoritario, todos los grupos y partidos de izquierda intensificaron sus ejercicios testimoniales. En algunos casos, como en este documento del PVP, "verdad" y justicia aparecían juntas:

Para poder juzgar el militarismo el pueblo uruguayo debe saber qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años en las cárceles del régimen. Debe saber de los presos que murieron en la tortura, debe saber qué pasó con los presos políticos desaparecidos, debe saber cómo funciona la OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y demás servicios de represión política.<sup>86</sup>

En otros casos, la necesidad de hablar sobre la prisión, la tortura, las desapariciones y otras experiencias similares no fue directamente proporcional a la preocupación por políticas concretas para enjuiciar a los responsables, lo cual era con frecuencia considerados un asunto de complejas transacciones políticas. Un ejemplo se encuentra en la revista comunista *Estudios* que incluía una sección llamada "Testimonios del horror y el heroísmo" donde miembros del partido relataban sus experiencias de la cárcel y la tortura pero sin referir a las consecuencias legales de sus testimonios. En 1983, la sección dejó de publicarse.<sup>87</sup>

Estos y otros testimonios de los militantes de izquierda no identificaban a los responsables de los crímenes sino que perseguían dos objetivos independientes del tema de las responsabilidades penales. En primer lugar, apuntaban a comunicar sus experiencias y hacer que la sociedad toda reconociera lo que habían pasado. En segundo lugar, trataban de explicar el sentido de esas experiencias extremas en el marco de la militancia de izquierda. Las apelaciones heroicas impregnaban estas explicaciones. Al igual que en el lenguaje de los derechos humanos, la represión aparecía como una práctica sistemática del régimen autoritario. Se apartaban de este lenguaje, sin embargo, al hacer hincapié en las identificaciones ideológicas y políticas de quienes habían cometido y sufrido esos crímenes, así como al unir los reclamos de derechos humanos con la lucha por un cambio político y social más profundo. Los diferentes sectores de la izquierda coincidían en que una década de represión daba prueba de su capacidad de resistencia y su fortaleza para sobrellevar la brutalidad del régimen. En un sentido similar, sucesivas series de dirigentes y militantes presos, torturados y asesinados eran enumeradas para mostrar el alcance de la represión contra quienes no habían abdicado de sus principios. El fundamento parecía ser que cuanto más bajas presentara la izquierda, más fuerte había sido la oposición a la dictadura.<sup>88</sup>

También el intento de desligarse de cualquier forma de debilidad y una enfática negación de casos de "traición" y "colaboración" entre sus filas buscaba subrayar la profundidad de su compromiso militante. Esto era particularmente importante en el caso de los comunistas, quienes mantuvieron actividad clandestina y tuvieron la mayor cantidad de presos políticos durante los años de autoritarismo. Se erigió una suerte de "código de honor" según el cual el PCU había sido la "columna vertebral de la resistencia popular en Uruguay", con nuevas generaciones dispuestas a asumir el lugar de los militantes encarcelados, torturados o asesinados. Los dirigentes comunistas solían sostener que ninguno de sus cuadros había "fallado" bajo tortura. Al reconocer que otros, como Seregini, también habían soportado la tortura sin colaborar con los militares, los elogiaban diciendo que se

habían “comportado como comunistas”. Otros grupos rechazaron esta forma de expresarse, más porque reivindicaban su propia cuota de sacrificio que porque estuvieran dispuestos a reconocer la existencia de “colaboradores” o “traidores” en sus filas.<sup>89</sup>

En comparación con la retórica militante de fines de los sesenta y principios de los setenta, el significado final del sacrificio en las nuevas apelaciones heroicas mostraba cambios importantes. En primer lugar y en consonancia con un rasgo característico del discurso de derechos humanos, los abusos no aparecían ahora como algo que debía esperarse en la vida de un militante sino como la manifestación de un sistema brutal que pretendía acallar todo disenso. En el nuevo lenguaje heroico, la idea fundamental seguía siendo que los militantes habían estado a la altura de sus propios criterios de sacrificio, pero denunciar lo que habían soportado parecía más importante que describir sus virtudes. En segundo lugar, los objetivos que merecían la entrega eran menos la revolución y el cambio socialista que la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos civiles y políticos suprimidos por el régimen. Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron probablemente los primeros “mártires de la democracia” de la izquierda exiliada a fines de los setenta. Aunque no todos los grupos y partidos adhirieron a este “martirologio democrático” con la misma pasión, hubo rastros del mismo en la mayoría de sus declaraciones durante los últimos días de la dictadura. El PCU, por ejemplo, justificaba su reclamo de amnistía observando que “La democracia uruguaya no puede prescindir de [...] quienes han pagado con cárcel, tortura, con sacrificio, con gran esfuerzo por la conquista misma de estas perspectivas [democráticas]”.<sup>90</sup> Ésta fue también una operación inteligente para despertar la simpatía de quienes no eran miembros de esos grupos y partidos, en sintonía con el esfuerzo de fundar en el pasado la presentación de la izquierda como un actor político confiable.<sup>91</sup>

De modo más general, esas nuevas formas de hablar del pasado reciente indicaban una cierta reconsideración de las concepciones más tradicionales de la política y el cambio social. Entre los exiliados, esta revisión tenía sus raíces en intentos previos de redirigir sus actividades, ejemplificados en el compromiso con el activismo transnacional

de derechos humanos desde la segunda mitad de los setenta. Más o menos por esa misma época, un importante grupo de intelectuales sudamericanos exiliados, en su mayoría argentinos y chilenos, comenzó a buscar nuevas herramientas conceptuales para entender el autoritarismo en la región. Además de inspirarse en sus propias experiencias políticas, estos intelectuales incorporaron los debates marxistas del momento que apuntaban a la meditación teórica y el estudio crítico de los recientes acontecimientos en la Unión Soviética y otros países socialistas, así como de los desafíos enfrentados por los Estados de bienestar europeos y los populismos latinoamericanos. En resumen, esta búsqueda llevó a muchos de esos intelectuales a enaltecer la democracia política como objetivo y a proponer transiciones pacíficas para salir del autoritarismo en sus países. Este credo expresaba tanto su oposición a los “nuevos autoritarismos” sudamericanos como un alejamiento notorio de sus anteriores ideas acerca de la acción revolucionaria y la transformación socialista.<sup>92</sup>

Aunque las fuentes no revelan tentativas tan sistemáticas de reconsideración de sus fundamentos ideológicos, es claro que estos debates influyeron en las posiciones de los exiliados uruguayos, intelectuales o no.<sup>93</sup> Junto con la magnitud de la represión en su país, que superaba cualquier experiencia anterior, un reciente interés en las ideas de Antonio Gramsci incidió en la reevaluación de su papel en la promoción del cambio social y político. Las referencias gramscianas a la “hegemonía” fueron herramientas para ajustar la idea de la política como confrontación, central antes del golpe, diferenciando entre conflictos políticos y sociales para alentar la percepción de la política como la creación conjunta de un ámbito para la participación y el debate pacíficos. Estas ideas, a su vez, erosionaron la importancia de nociones leninistas tradicionales de “vanguardia”, a pesar de que hubo también algunos intentos de conciliar las opiniones de los dos pensadores marxistas. Más allá de matices ideológicos y especulaciones teóricas, el nuevo discurso heroico, con su énfasis en la descripción de las violaciones y su exaltación de la democracia, significó un claro alejamiento de la concepción previa de las fuerzas de izquierda como vanguardias conscientes que iluminarían a las masas de otro modo inactivas.<sup>94</sup>

Otra importante novedad en las apelaciones heroicas del período de la transición fue que el exilio empezó a ser presentado como una prueba más del sacrificio de la izquierda. En años anteriores, el exilio no había sido destacado como una experiencia particularmente traumática, probablemente porque se consideraba leve en comparación con lo que otros soportaban dentro del país. El exilio estaba incluido en la propuesta de amnistía de SIJAU y había habido cierto interés en el tema por parte de escritores e intelectuales, pero los dirigentes y militantes políticos no analizaron en detalles esa experiencia hasta que la apertura política en Uruguay sugirió que estaba por terminar.<sup>95</sup> El nuevo interés estaba a tono con la proliferación de testimonios personales sobre las diferentes formas de la represión, lo que evidenciaba la necesidad de compartir una serie de vivencias que no habían podido hacerse públicas durante el período autoritario. Todos estos relatos enfatizaban el significado político de las trayectorias personales. En el caso de los exiliados, sus testimonios se referían a la "identidad del exilio" como una condición impuesta, otra expresión de la determinación de la izquierda ante la brutalidad del régimen.<sup>96</sup>

➤ Sin embargo, la consolidación de esta identidad no llevó a la expresión de una "voz del exilio" durante el período de la transición. Los compromisos partidarios siguieron definiendo las posiciones de los militantes de izquierda dentro y fuera del país. Aunque es posible que una mayor investigación sobre itinerarios individuales eche más luz al respecto, esta situación parece contrastar con el caso chileno donde la experiencia del exilio definió conductas políticas en el período de la transición y la etapa posterior.<sup>97</sup> En Uruguay, hubo un esfuerzo consciente por parte de los grupos y partidos de izquierda por enfatizar su unidad interna, a pesar de que sus militantes habían vivido experiencias totalmente diferentes en los últimos diez años. Una vez más, los comunistas fueron probablemente los que dieron a esta idea la formulación más cruda: "Somos un solo Partido en el exilio, la cárcel y la clandestinidad".<sup>98</sup> Pero el énfasis en la continuidad por encima de las interrupciones, aún cuando se hablaba de experiencias extremas, fue fundamental para el conjunto de la izquierda.

Este deseo expresaba una preocupación común por la reconstrucción de espacios de movilización social y política que habían sido duramente reprimidos y desmantelados en años anteriores. El desafío principal era reunir a militantes que habían transitado caminos diferentes y muchas veces desconectados de resistencia a la dictadura. Se debatió bastante sobre cómo alcanzar ese objetivo, pero toda la izquierda aspiraba a promover la unidad entre los nuevos y poderosos movimientos sociales que irrumpieron en la escena pública durante el período de la transición y aquellos más pequeños pero fervientes grupos que actuaban en la clandestinidad y en el exterior.<sup>99</sup>

En el caso de los exiliados, un aspecto interesante de este énfasis en la unidad fue la reafirmación de los orígenes nacionales. Tan pronto como estuvo claro que su destierro estaba por terminar, las referencias a la vuelta a Uruguay como un deber político de todo exiliado comenzaron a inundar discursos, proclamas y boletines. Los dirigentes del PCU insistían en las diferencias entre "emigrantes" y "exiliados", definiendo a los últimos no sólo en términos políticos sino por su deseo de volver a trabajar por su patria.<sup>100</sup> La mayoría de los exiliados comenzó a hablar de su inminente retorno, a describir a Uruguay con un tono cada vez más nostálgico y a infundir la idea de que la "reconstrucción de nuestra patria" era la responsabilidad más inmediata de todos. Así, la muerte de un exiliado era presentada como un hecho especialmente trágico, no sólo por la imposibilidad de contribuir al período democrático que se acercaba, sino también porque no sería posible enterrarlos en "nuestro suelo". Los obituarios por las muertes de Carlos Quijano en México en junio y de Enrique Erro en París en octubre de 1984, por ejemplo, hicieron explícita esta conexión tradicional entre identidad nacional y la tierra donde "están enterrados nuestros ancestros."<sup>101</sup> Otro ejemplo consumado de la importancia simbólica de esta conexión en el contexto del exilio fue la excursión clandestina de Juan Raúl Ferreira a Uruguay en junio de 1982 para poner flores en el monumento de uno de los líderes históricos de su partido.<sup>102</sup>

Un emprendimiento más razonable y prudente fue el viaje de un grupo de hijos de exiliados a Uruguay. Con la ayuda de varias



organizaciones políticas y sociales españolas, 154 niños de entre uno y quince años partieron de Madrid el 25 de diciembre de 1983. Una multitud entusiasta les dio la bienvenida en Montevideo y varias organizaciones sociales planearon recorridos y actividades para mostrarles un país que la mayoría conocía sólo por los cuentos de sus padres y las cartas de sus familiares.<sup>103</sup> Mantener vivo en sus hijos el sentimiento de ser uruguayos fue una preocupación importante para los exiliados, expresada en las varias "escuelas de fin de semana" y otras actividades culturales desarrolladas en todo el mundo. Después de 1980, cuando la posibilidad del regreso parecía más cercana, se intensificaron los intentos de que sus hijos compartieran el deseo de volver. Estas iniciativas mostraban hasta qué punto lo político se entrelazaba en las vidas de los exiliados, tanto en sus decisiones de regresar a mediados de los ochenta como en sus razones para irse durante la década anterior.<sup>104</sup>

La bienvenida a los "niños del exilio" en 1983 fue la primera de una serie de manifestaciones que saludó en las calles de Montevideo a los exiliados que volvieron entre 1984 y 1985. Algunos líderes políticos y otras personalidades fueron cálidamente recibidos en esos años, incluidos Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl, encarcelados a su llegada, los líderes comunistas Enrique Rodríguez y Rodney Arismendi y los cantantes populares Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa y Los Olimareños. Algunos ya habían sido recibidos por otros exiliados en Buenos Aires, que después de la recuperación de la democracia en 1983 se transformó nuevamente en un puente entre Uruguay y el resto del mundo, pero ahora en el sentido inverso que a principios de los setenta. Además de las manifestaciones populares, otros emprendimientos mostraron un esfuerzo sistemático para traer a los miles de uruguayos que se habían tenido que ir en años anteriores. La Comisión Nacional del Reencuentro (CNR) fue fundada en diciembre de 1983 con representantes de los partidos mayoritarios, incluida la hija de Ferreira Aldunate, Silvia (Partido Nacional), Victor Vaillant (Partido Colorado) y Hugo Villar (dirigente del FAE que todavía vivía en Madrid). La CNR elaboró una serie de programas para ayudar a los exiliados a readaptarse al país, especialmente en relación a la

recuperación de sus empleos en el sector público, la transferencia de créditos de universidades extranjeras y la ayuda a sus hijos para ajustarse al sistema educativo uruguayo.<sup>105</sup> El Servicio Ecuménico de Reinserción fue fundado también en 1983 para ayudar a los exiliados que regresaban y en 1984 un grupo de psicólogos y trabajadores sociales recibió fondos para iniciar el Servicio de Rehabilitación Social, una organización de apoyo a expresos y exiliados.

Estos emprendimientos expresaban una preocupación creciente por el alcance y las consecuencias de las diferentes formas de represión en Uruguay, así como una determinación de ayudar a los exiliados a establecerse en su país. La ayuda de organizaciones internacionales fue fundamental para conseguir los medios financieros necesarios para cumplir estos objetivos. También respaldó varios proyectos que apuntaban a comprender el fenómeno del exilio desde una perspectiva académica. En los ochenta, organizaciones de países que habían recibido exiliados uruguayos apoyaron estudios en esta materia. Muchos de esos proyectos fueron llevados a cabo por exiliados que trabajaban en instituciones de investigación en Europa y Estados Unidos.<sup>106</sup> Los lazos con los grupos transnacionales de derechos humanos también continuaron durante el período democrático mediante ayudas y propuestas de estimular el activismo de derechos humanos en el país. AI, por ejemplo, siguió dando ayuda financiera a ex presos y presionó a políticos y futuras autoridades civiles para que se establecieran secciones de AI en Uruguay.<sup>107</sup>

Todas estas iniciativas eran el resultado de más de una década de actividades transnacionales por parte de los exiliados. Durante la transición, en lugar de intensificar su prédica por los derechos humanos, la mayoría reorientó sus energías hacia los nuevos acontecimientos políticos en Uruguay y trató de organizar su retorno. Para los exiliados, como para el resto de la izquierda (y para otros actores políticos y sociales en esos años), los tempranos ochenta fueron un período de replanteo de sus estrategias dentro de un nuevo contexto. En relación a los derechos humanos, esto implicaba moderar los planteos más enérgicos y acomodar el reclamo de castigo a los culpables a la estrategia negociadora predominante. Los militantes de

izquierda continuaron sus tareas de denuncia, pero muchos evitaron exigir medidas concretas para juzgar a los acusados de esas violaciones. En general, el deseo de encontrar una salida rápida resultó más poderoso que cualquier otro objetivo. En ese contexto, el principal valor del lenguaje de derechos humanos fue testimonial, una forma de mostrar lo que miles de militantes habían soportado. Esto implicó volver a usar apelaciones heroicas para hacer que la sociedad toda conociera y entendiera el alcance de su lucha contra el régimen. Esta nueva combinación de lenguaje de derechos humanos y referencias heroicas reflejó el intento de la izquierda de comprender sus experiencias de la década anterior y darles un sentido en la nueva situación política. Por esta causa, otros actores políticos con frecuencia los acusaron de querer limpiar su papel en la violencia política de fines de los sesenta y soslayar su cuota de responsabilidad en los acontecimientos que llevaron al golpe de 1973.<sup>108</sup>

Entre 1980 y 1984, todos los actores relevantes discutieron qué había pasado en el país durante los anteriores diez a quince años, confrontando sus recuerdos y buscando una salida. Al igual que el resto del espectro político, los grupos y partidos de izquierda actuaron como "agentes de memoria", alimentando los complejos procesos de formación de "memorias colectivas".<sup>109</sup> Las versiones oficiales sobre el período anterior al golpe y la dictadura habían sido las únicas que se habían podido expresar públicamente durante los años de autoritarismo. Desde 1973, las Fuerzas Armadas afirmaron el "rol histórico" de los militares, dando forma al paisaje urbano con monumentos y obras que representaban su versión del pasado.<sup>110</sup> La mayoría de los grupos de oposición no habían tenido siquiera la posibilidad de llorar a sus muertos y rendirles homenaje público. En este contexto, la inesperada apertura de principios de los ochenta significó también la posibilidad de hablar sobre hechos que no habían sido discutidos explícitamente durante casi una década. Las memorias que empezaron a afirmarse como resultado de las nuevas condiciones políticas fueron con frecuencia la base para legitimar el derecho a hablar del presente. La fuerte relación entre estos temas y la posibilidad de la transición a la democracia llevó a la negociación

de las memorias en términos políticos. En este sentido, el lenguaje de derechos humanos, una vez moderado de sus aristas más radicales, se transformó en una herramienta útil para presentar a la izquierda como un actor político confiable que no sólo había soportado el grueso de la represión sino que también estaba dispuesto a desistir de la venganza y adaptarse a la vida democrática.